

Edición
en lengua española

Comunicaciones e informaciones

<u>Número de información</u>	Sumario	Página
	I <i>Comunicaciones</i>	
	Comisión	
2003/C 189/01	Tipo de cambio del euro	1
2003/C 189/02	Ayudas estatales — España — Invitación a presentar observaciones, en aplicación del apartado 2 del artículo 88 del Tratado CE, sobre la ayuda C 40/03 (ex N 50/B/02) — Ayudas a la investigación y desarrollo para la empresa Ibermática ⁽¹⁾	2
2003/C 189/03	Ayudas estatales — Suecia — Invitación a presentar observaciones, en aplicación del apartado 2 del artículo 88 del Tratado CE, sobre la ayuda C 42/03 (ex NN 3/B/01) — Suecia — Sistema fiscal para la energía ⁽¹⁾	6
2003/C 189/04	Ayudas estatales — Austria — Invitación a presentar observaciones, en aplicación del apartado 2 del artículo 88 del Tratado CE, sobre la ayuda C 44/03 (ex NN 158/01) — Ayuda a la reestructuración del Banco Burgenland AG ⁽¹⁾	13
2003/C 189/05	Ayudas estatales — Francia — Invitación a presentar observaciones, en aplicación del apartado 2 del artículo 88 del Tratado CE, sobre la ayuda C 46/03 (ex NN 39/03) — Francia — Cotizaciones en favor de Interbev	21
2003/C 189/06	Notificación previa de una operación de concentración (asunto COMP/M.3251 — PAI Partners/GrandVision) — Asunto susceptible de ser tratado por procedimiento simplificado ⁽¹⁾	32

II *Actos jurídicos preparatorios*

.....

Número de información

Sumario (*continuación*)

Página

III *Informaciones*

Comisión

2003/C 189/07

Anuncio de convocatoria de propuestas — Apoyo para la rehabilitación de las víctimas de la tortura — EuropeAid/116969/C/G 33

I

(Comunicaciones)

COMISIÓN

Tipo de cambio del euro ⁽¹⁾

8 de agosto de 2003

(2003/C 189/01)

1 euro =

Moneda	Tipo de cambio	Moneda	Tipo de cambio		
USD	dólar estadounidense	1,1326	LVL	lats letón	0,6469
JPY	yen japonés	134,83	MTL	lira maltesa	0,4276
DKK	corona danesa	7,4345	PLN	zloty polaco	4,364
GBP	libra esterlina	0,70335	ROL	leu rumano	37 300
SEK	corona sueca	9,202	SIT	tólar esloveno	234,945
CHF	franco suizo	1,5367	SKK	corona eslovaca	41,71
ISK	corona islandesa	88,63	TRL	lira turca	1 588 000
NOK	corona noruega	8,1625	AUD	dólar australiano	1,7384
BGN	lev búlgaro	1,9462	CAD	dólar canadiense	1,5813
CYP	libra chipriota	0,58706	HKD	dólar de Hong Kong	8,8337
CZK	corona checa	32,03	NZD	dólar neozelandés	1,945
EEK	corona estonia	15,6466	SGD	dólar de Singapur	1,9879
HUF	forint húngaro	259,24	KRW	won de Corea del Sur	1 337
LTL	litas lituana	3,4533	ZAR	rand sudafricano	8,3066

(1) Fuente: tipo de cambio de referencia publicado por el Banco Central Europeo.

AYUDAS ESTATALES — ESPAÑA

Invitación a presentar observaciones, en aplicación del apartado 2 del artículo 88 del Tratado CE, sobre la ayuda C 40/03 (ex N 50/B/02) — Ayudas a la investigación y desarrollo para la empresa Ibermática

(2003/C 189/02)

(Texto pertinente a efectos del EEE)

Por carta de 11 de junio de 2003, reproducida en la versión lingüística auténtica en las páginas siguientes al presente resumen, la Comisión notificó al Reino de España su decisión de incoar el procedimiento previsto en el apartado 2 del artículo 88 del Tratado CE en relación con la ayuda antes citada.

Las partes interesadas podrán presentar sus observaciones en un plazo de un mes a partir de la fecha de publicación del presente resumen y de la carta que figura a continuación, enviándolas a:

Comisión Europea
Dirección General de Competencia
Registro de Ayudas Estatales
Dirección de Ayudas Estatales I — Unidad G2
B-1049 Bruxelles/Brussel
Fax (32-2) 296 12 42.

Dichas observaciones serán comunicadas al Reino de España. La parte interesada que presente observaciones podrá solicitar por escrito, exponiendo los motivos de su solicitud, que su identidad sea tratada confidencialmente.

RESUMEN**1. PROCEDIMIENTO**

Las autoridades españolas notificaron un proyecto de ayuda a la empresa Ibermática por carta de 16 de enero de 2002, registrada por la Comisión el 17 de enero de 2002. Este expediente se dividió en dos subexpedientes. El primero, registrado con la referencia N 50/A/02, se refiere a la parte de la ayuda destinada a una inversión productiva. Esta ayuda fue autorizada por la Comisión el 27 de noviembre de 2002. El segundo, registrado con la referencia N 50/B/02, se refiere a la parte de la ayuda destinada a una inversión en investigación y desarrollo (I+D). La presente decisión se refiere a esta segunda ayuda. La Comisión pidió a las autoridades españolas información complementaria sobre la medida en reiteradas ocasiones. Las autoridades españolas respondieron a estas peticiones, la última vez por carta de 23 de abril de 2003, registrada por la Comisión ese mismo día.

2. DESCRIPCIÓN DE LA AYUDA

Se trata de una ayuda al grupo Ibermática. Ibermática agrupa a una veintena de empresas que ejercen sus actividades en el ámbito de la informática.

Según la descripción de las autoridades españolas, el proyecto de I+D consta de dos elementos principales:

El primero corresponde a actividades de I+D en cuatro grandes ámbitos de competencia de la empresa: programas informáticos de gestión de la producción, programas informáticos de gestión del personal, programas informáticos de gestión del conocimiento y programas informáticos de gestión de sistemas. El segundo se realizará esencialmente en las filiales Zabalnet y

RPS del grupo Ibermática. Se refiere más concretamente al desarrollo, para Zabalnet, de herramientas de «formación virtual» y a distancia, y, para RPS, de herramientas de gestión de PYMES.

Las autoridades regionales del País Vasco conceden la ayuda en forma de un préstamo sin intereses de 2,8 millones de euros sobre un coste total del proyecto de 14,02 millones de euros. Las autoridades españolas indicaron que el proyecto daba lugar a un aumento de los gastos de I+D realizados por la empresa beneficiaria en el País Vasco y de la parte de estos gastos sobre el volumen de negocios total del grupo.

3. EVALUACIÓN

La Comisión ha analizado este proyecto a la luz del Encuadramiento comunitario sobre ayudas de Estado de investigación y desarrollo ⁽¹⁾ (en lo sucesivo, «el Encuadramiento I+D»). Este análisis ha inducido a la Comisión a formular las siguientes dudas acerca de la compatibilidad de las ayudas con las disposiciones del Encuadramiento.

— En primer lugar, la Comisión duda de la naturaleza de actividades de I+D, en el sentido del Encuadramiento I+D, de las actividades beneficiarias de las ayudas.

En efecto, la información proporcionada por las autoridades españolas sobre el contenido concreto de las actividades de investigación es extremadamente vaga. No permite determinar si las actividades en cuestión darán lugar a desarrollar nuevos conocimientos o nuevos productos, procesos o servicios.

⁽¹⁾ DO C 45 de 17.2.1996, p. 5.

- En segundo lugar, la Comisión emite dudas sobre la compatibilidad de la intensidad de las ayudas concedidas con los criterios del Encuadramiento I+D.

En efecto, dado que la Comisión no puede determinar si las actividades contempladas por las ayudas constituyen I+D en el sentido del Encuadramiento ni a qué fase de I+D pertenecen estas actividades, no puede determinar la intensidad de la ayuda, y en consecuencia no puede comprobar su compatibilidad con los criterios del Encuadramiento I+D.

- En tercer lugar, la Comisión tiene dudas sobre el efecto de incentivación de las ayudas.

La Comisión tiene en cuenta que, si las cifras facilitadas por las autoridades españolas reflejan efectivamente un aumento de la proporción de los gastos de I+D realizados por el grupo en el País Vasco sobre el volumen de negocios total, en cambio, estas cifras no muestran un aumento tan claro de la parte de los gastos totales de I+D del grupo en la Unión Europea con relación a su volumen de negocios. Además, la Comisión constata que las autoridades españolas no han facilitado argumentos cualitativos precisos que permitan demostrar el efecto incentivador de la ayuda.

4. CONCLUSIÓN

Habida cuenta de las consideraciones expuestas, la Comisión invita al Reino de España, en el marco del procedimiento previsto en el apartado 2 del artículo 88 del Tratado CE, a que le presente sus observaciones y le facilite toda información útil para la evaluación de este proyecto. En particular, la Comisión invita a las autoridades españolas a proporcionarle información sobre la naturaleza de I+D de las actividades emprendidas, así como sobre el efecto de incentivación de la ayuda.

CARTA

«Por la presente, la Comisión tiene el honor de comunicar al Reino de España que, tras haber examinado la información facilitada por sus autoridades, sobre la medida arriba indicada, ha decidido incoar el procedimiento previsto en el apartado 2 del artículo 88 del Tratado CE.

1. PROCEDIMIENTO

Mediante carta de 16 de enero de 2002, registrada el 17 de enero de 2002, las autoridades españolas notificaron un proyecto de ayuda en favor de la empresa Ibermática. Este expediente se dividió en dos. Un primer caso, registrado con la referencia N 50/A/02, afecta a la parte de la ayuda destinada a una inversión productiva. La Comisión autorizó dicha ayuda el 27 de noviembre de 2002. Un segundo caso, registrado con la referencia N 50/B/02, se refiere a la parte de la ayuda destinada a una inversión a la investigación y el desarrollo. La presente Decisión se refiere a este segundo caso.

La Comisión solicitó a las autoridades españolas información complementaria sobre la medida en diversas ocasiones. Las autoridades españolas respondieron a dichas peticiones, la última vez mediante carta de 23 de abril de 2003, registrada por la Comisión ese mismo día.

2. DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LA MEDIDA

2.1. Beneficiario

La empresa beneficiaria es el grupo Ibermática. Ibermática agrupa a una veintena de empresas presentes en España, especialmente en el País Vasco, y en América Latina. Estas empresas ejercen sus actividades en el sector de la informática, y más concretamente en el de los programas informáticos de gestión de empresas. En el año 2000, el grupo contaba con unos efectivos totales de 1 274 personas, de las que 1 119 trabajaban en España. Su volumen de negocios ascendió en ese año a cerca de 100 millones de euros, 80 de los cuales en España.

2.2. Proyecto de investigación contemplado por las ayudas

De acuerdo con la descripción facilitada por las autoridades españolas, el proyecto de investigación y desarrollo consta de dos grandes elementos:

El primero se refiere a las actividades de investigación y desarrollo en cuatro grandes ámbitos de competencia del beneficiario:

1. Programas informáticos de gestión de la producción.

El proyecto contempla el desarrollo de metodologías y sistemas comunes a numerosos programas informáticos de este tipo, utilizando en particular las tecnologías emergentes en el mundo de Internet, como Java o XML. Una de las actividades consiste en implantar en la empresa un sistema de desarrollo de programas informáticos a distancia.

2. Programas informáticos de gestión de personal.

El proyecto contempla la investigación de nuevos métodos y sistemas informáticos de ayuda para la gestión de los recursos humanos, como, por ejemplo, los sistemas de autoevaluación y de diagnóstico que utilizan elementos interactivos y multimedia.

3. Programas informáticos de gestión del conocimiento.

El proyecto contempla el desarrollo de herramientas cooperativas que permitan la integración de distintas tecnologías como las bases de datos, las herramientas de gestión de documentos, las redes intranet y extranet.

4. Programas informáticos de gestión de sistemas

El proyecto contempla el desarrollo de una aplicación para la gestión empresarial, y en particular para la gestión de alianzas y adquisiciones.

El segundo elemento del proyecto se realiza fundamentalmente en las filiales Zabalnet y RPS del grupo Ibermática. Más concretamente, en el caso de Zabalnet, el proyecto contempla el desarrollo de herramientas de «formación virtual» y a distancia, y, en el de RPS, el desarrollo de herramientas de gestión de PYME.

2.3. Costes subvencionables y forma de la ayuda

Los costes subvencionables, que ascienden a un total de 14,02 millones de euros, se desglosan por ámbito de actividad y por categoría de costes de la siguiente manera (importes en millones de euros):

	Total	Categoría de costes			Año			
		Gastos de personal	Colaboraciones externas	Gastos generales adicionales	2000	2001	2002	2003
Producción	1,38	0,97	0,32	0,10	0,19	0,40	0,40	0,40
Personal	1,20	0,84	0,28	0,08	0,42	0,30	0,30	0,18
Conocimientos	2,22	1,56	0,51	0,16	0,52	0,47	0,62	0,62
Sistemas	0,33	0,23	0,07	0,02	0,09	0,09	0,09	0,06
Formación y PYME	8,88	4,44	4,00	0,44	0,68	2,39	2,90	2,91
Total	14,02	8,04	5,17	0,81	1,90	3,64	4,30	4,17

La ayuda consiste en un préstamo sin intereses por un importe total de 2,8 millones de euros concedido por las autoridades autonómicas del País Vasco. Las modalidades de desembolso y reembolso de este préstamo se indican a continuación.

Año	Importe de la inversión (en miles de euros)	Pago (en miles de euros)	Reembolso (en miles de euros)
2000	1 899		
2001	3 642	1 106	
2002	4 303	859	
2003	4 171	835	
2004			349
2005			349
2006			349
2007			349
2008			349
2009			349
2010			355
2011			355
Total	14 016	2 801	2 081

2.4. Efecto de incentivación

Las autoridades españolas señalaron que el proyecto conllevaba un aumento de los gastos de investigación y desarrollo efectuados por el grupo Ibermática en el País Vasco, así como un incremento de esos gastos en relación con el volumen de negocios del grupo, tal como reflejan los datos siguientes (las cifras correspondientes a 2002 y 2003 son estimativas):

Año	1999	2000	2001	2002	2003
Volumen de negocios (en millones de euros)	74,459	82,621	108,591	126,158	144,243
Gastos de I+D (en millones de euros)	2,915	3,834	4,586	6,082	6,341
Gastos de I+D en el País Vasco (en millones de euros)	1,004	1,749	2,470	3,792	3,480
Gastos de I+D en el País Vasco/volumen de negocios	1,35 %	2,12 %	2,27 %	3,01 %	2,41 %

Las autoridades españolas llamaron asimismo la atención de la Comisión sobre la importancia de las actividades económicas vinculadas a la sociedad de la información para la economía europea en general y para la economía del País Vasco en particular.

3. EVALUACIÓN

Las medidas previstas por las autoridades españolas confieren una ventaja a la empresa beneficiaria, al descargarla de una

parte de los costes que en principio debería soportar. Esta ventaja tiene, además, un carácter selectivo respecto a otras empresas que quisieran llevar a cabo tales actividades. Asimismo puede afectar a los intercambios intracomunitarios habida cuenta de las corrientes de intercambio de programas informáticos entre Estados miembros. Por último, es el Gobierno vasco el que directamente concede los préstamos sin intereses, es decir, por medio de recursos estatales. Las medidas en cuestión constituyen, por tanto, ayudas estatales en el sentido del apartado 1 del artículo 87 del Tratado CE.

La Comisión evaluó este proyecto a la luz del Encuadramiento comunitario sobre ayudas de Estado de investigación y desarrollo ⁽²⁾ (en lo sucesivo, el «Encuadramiento»).

Este análisis ha llevado a la Comisión a formular las dudas que figuran a continuación sobre la compatibilidad de la totalidad o de una parte de las ayudas con las disposiciones del Encuadramiento.

— En primer lugar, la Comisión formula sus dudas en cuanto al carácter de actividad de investigación y desarrollo en el sentido del Encuadramiento de las actividades que se benefician de las ayudas.

En efecto, la información facilitada por las autoridades españolas sobre el contenido concreto de las actividades de investigación es extremadamente vaga. Esas informaciones hacen referencia a algunos grandes ámbitos de actividad (gestión de personal, gestión del conocimiento, etc.), a algunas tecnologías informáticas (Internet, Java, XML, etc.) o a algunos tipos de productos informáticos (bases de datos, sistemas compartidos, etc.), sin precisar más en qué consisten las actividades emprendidas por Ibermática.

La Comisión no puede, por tanto, determinar si estas actividades conducirán al desarrollo de nuevos conocimientos o nuevos productos, métodos o servicios, condiciones necesarias para que puedan considerarse como actividades de investigación y desarrollo en el sentido de una al menos de las tres fases de investigación definidas en el anexo I del Encuadramiento.

Dado que la Comisión no puede determinar si las actividades que se benefician de las ayudas están relacionadas con al menos una de estas tres fases de investigación, con mayor razón tampoco puede determinar en cuál de esas fases podrían encuadrarse.

— En segundo lugar, la Comisión formula sus dudas en cuanto a la compatibilidad de la intensidad de las ayudas pagadas con los criterios del Encuadramiento.

En efecto, dado que la Comisión no puede determinar si algunas de las actividades que se benefician de las ayudas son realmente actividades de investigación y desarrollo en el sentido del Encuadramiento ni a qué fase de investigación y desarrollo están vinculadas dichas actividades, tampoco puede establecer qué parte de los costes notificados por las autoridades españolas puede considerarse subvencionable en el sentido del Encuadramiento y en consecuencia cuál es la base sobre la que debe calcularse la intensidad de la ayuda. Al no poder fijar la intensidad de la ayuda, la Comisión tampoco puede comprobar su compatibilidad con los criterios establecidos en el Encuadramiento.

— En tercer lugar, la Comisión expresa sus dudas sobre el efecto de incentivación de las ayudas.

Este efecto de incentivación no puede presumirse en el presente caso ya que la empresa Ibermática no es una PYME en el sentido de la definición comunitaria.

A este respecto, la Comisión observa que, si bien es cierto que las cifras proporcionadas por las autoridades españolas muestran un incremento de los gastos en investigación y desarrollo realizados por el grupo en el País Vasco en relación con el volumen de negocios total del grupo, en cambio, esas cifras no demuestran un incremento tan claro cuando lo que se compara son los gastos totales en investigación y desarrollo del grupo y su volumen de negocios.

Además, la Comisión observa que los únicos argumentos cualitativos que las autoridades españolas han presentado para demostrar el efecto de incentivación de la ayuda son vagas consideraciones sobre la importancia de la sociedad de la información para la economía europea en general y para la del País Vasco en particular. La Comisión considera que estos argumentos no son lo suficientemente precisos para demostrar el efecto de incentivación de una ayuda estatal en el sentido del Encuadramiento.

Por último, las autoridades españolas no han esgrimido, ni la Comisión ha encontrado, razones para poder evaluar la ayuda a la vista de otras excepciones previstas por el Tratado

4. CONCLUSIÓN

Habida cuenta de las consideraciones anteriores, la Comisión invita al Reino de España, en el marco del procedimiento previsto en el apartado 2 del artículo 88 del Tratado CE, a que le presente sus observaciones y le facilite toda información pertinente para la evaluación de este proyecto de ayudas en el plazo de un mes a partir de la fecha de recepción de la presente. En particular, la Comisión invita a las autoridades españolas a que le proporcionen información sobre la naturaleza exacta de las actividades de investigación y desarrollo llevadas a cabo, así como sobre el efecto de incentivación de la ayuda. La Comisión invita asimismo a las autoridades de su país a que transmitan inmediatamente una copia de esta carta al beneficiario potencial de la ayuda.

La Comisión recuerda al Reino de España el efecto suspensivo del apartado 3 del artículo 88, del Tratado CE y llama su atención sobre el artículo 14 del Reglamento (CE) n° 659/1999 del Consejo, de 22 de marzo de 1999, por el que se establecen disposiciones de aplicación del artículo 93 del Tratado ⁽³⁾, que precisa que cualquier ayuda concedida ilegalmente podrá ser reclamada al beneficiario.

Por la presente, la Comisión advierte el Reino de España que informará a los interesados mediante la publicación de la presente carta y de un resumen en el *Diario Oficial de la Unión Europea*. Asimismo informará a los interesados en los Estados miembros de la AELC signatarios del Acuerdo EEE a través de la publicación de una comunicación en el suplemento EEE del citado Diario Oficial y al Órgano de Vigilancia de la AELC mediante una copia de la presente. Se invitará a los todos los interesados a presentar sus observaciones en el plazo de un mes a partir de la fecha de publicación de la presente.»

⁽²⁾ DO C 45 de 17.2.1996, p. 5.

⁽³⁾ DO L 83 de 27.3.1999, p. 1.

AYUDAS ESTATALES — SUECIA**Invitación a presentar observaciones, en aplicación del apartado 2 del artículo 88 del Tratado CE, sobre la ayuda C 42/03 (ex NN 3/B/01) — Suecia — Sistema fiscal para la energía**

(2003/C 189/03)

(Texto pertinente a efectos del EEE)

Por carta de 11 de junio de 2003, reproducida en la versión lingüística auténtica en las páginas siguientes al presente resumen, la Comisión notificó a Suecia su decisión de incoar el procedimiento previsto en el apartado 2 del artículo 88 del Tratado CE con respecto a la exención total de la tasa eléctrica en favor de la industria manufacturera.

Las partes interesadas podrán presentar sus observaciones sobre la ayuda en el plazo de un mes a partir de la fecha de publicación del presente resumen y de la carta siguiente, enviándolas a:

Comisión Europea
Dirección General de Competencia
Registro de Ayudas Estatales
B-1049 Bruselas
Fax (32-2) 296 12 42.

Dichas observaciones serán comunicadas a Suecia. La parte interesada que presente observaciones podrá solicitar por escrito, exponiendo los motivos de su solicitud, que su identidad sea tratada confidencialmente.

RESUMEN**1. DESCRIPCIÓN**

La Comisión ha evaluado varias exenciones y reducciones del impuesto sueco sobre la energía y del impuesto CO₂ y considera que la exención del impuesto energético aplicable a los combustibles fósiles y la reducción del 75 % del impuesto CO₂ a favor de la industria manufacturera constituyen una ayuda estatal compatible con la letra c) del apartado 3 del artículo 87 del Tratado CE. También considera que el impuesto sobre la electricidad variable en función de las regiones del país, en favor del sector de servicios del norte de Suecia, constituye una ayuda estatal compatible con la misma disposición del Tratado.

La Comisión también evaluó la exención completa del impuesto energético aplicable a la electricidad en favor del sector manufacturero.

El impuesto energético se introdujo en Suecia en 1957. Se aplica a la electricidad y los combustibles fósiles y lo pagan los hogares, las empresas de servicios y también las manufactureras en lo relativo a los combustibles utilizados para calefacción no destinada a los procesos de producción. Las

empresas de determinados sectores manufactureros (NACE Rev. 1, secciones A-D) se benefician de una exención completa del impuesto energético sobre los combustibles y la electricidad utilizados para calefacción en los procesos de producción. La exención en su forma actual se introdujo el 1 de enero de 1993, es decir, antes de la adhesión de Suecia al Espacio Económico Europeo y a la Unión Europea y desde entonces no ha sufrido cambios.

2. EVALUACIÓN Y DUDAS DE LA COMISIÓN**2.1. Presencia de ayuda de conformidad con el apartado 1 del artículo 87 del Tratado CE**

La medida fiscal que ha favorecido y favorecerá en el futuro a los sectores manufactureros supone una pérdida de ingresos para el Estado. Por lo tanto, implica recursos estatales. La medida es selectiva ya que solamente se aplica a sectores específicos y concede una ventaja económica a los beneficiarios y puede potencialmente distorsionar la competencia. Puesto que las empresas manufactureras trabajan en sectores en los que existe un comercio entre Estados miembros, dicho comercio se ve afectado y la medida constituye una ayuda estatal cubierta por el apartado 1 del artículo 87 del Tratado CE.

2.2. **Compatibilidad de la ayuda de conformidad con el apartado 3 del artículo 87 del Tratado CE**

La Comisión constata que el sistema como tal constituía una ayuda existente, según lo definido en el primer inciso de la letra b) del artículo 1 del Reglamento (CE) n° 659/1999 del Consejo, de 22 de marzo de 1999, por el que se establecen disposiciones de aplicación del artículo 93 del Tratado CE ⁽¹⁾, en el momento de la adhesión de Suecia a la Unión Europea y hasta el 31 de diciembre del 2001.

A partir del 1 de enero del 2002 todos los regímenes de ayudas ambientales existentes deberían haberse adecuado a las Directrices comunitarias sobre ayudas estatales en favor del medio ambiente ⁽²⁾ («las Directrices») (punto 77). Con arreglo al punto 51.2 de las Directrices, las disposiciones del punto 51.1 pueden aplicarse a impuestos existentes si el impuesto ha de producir un efecto positivo apreciable en términos de protección del medio ambiente y si las excepciones se decidieron en el momento de adopción del impuesto. El impuesto energético sobre la electricidad cumple ambos criterios por lo que debe ser evaluado de acuerdo con el punto 51.1 de las Directrices.

Con arreglo al punto 51.1 b) de las Directrices, la Comisión puede aprobar exenciones de impuestos medioambientales por un máximo de diez años, si la reducción se refiere a un impuesto nacional impuesto recaudado en ausencia de impuesto comunitario, las empresas beneficiarias han de abonar, sin embargo, una parte significativa del impuesto nacional. Puesto que la exención del impuesto sobre la electricidad es del 100 % los beneficiarios no abonarán una proporción significativa.

Tampoco parecen cumplirse otras disposiciones del punto 51.1 en este caso. Por lo tanto, en la presente fase de evaluación la Comisión considera que la ayuda no es compatible con la letra c) del apartado 3 del artículo 87 del Tratado CE.

CARTA

«Kommissionen önskar genom denna skrivelse informera Sverige om att den, efter att ha granskat de upplysningar som tillhandahållits av Era myndigheter angående stödet i fråga, har beslutat att inte göra invändningar mot att tillverkningssektorn befrias från koldioxidskatt och energiskatt på fossila bränslen. Kommissionen gör inte heller några invändningar mot den regionalt differentierade skatten på el till förmån för tjänstesektorn. Kommissionen har emellertid beslutat att inleda ett förfarande om befrielsen från skatt på el till förmån för tillverkningssektorn.

1. FÖRFARANDE

En undersökning av den svenska koldioxidskatteordningen till förmån för särskilt energiintensiva industriföretag ledde till den nu aktuella undersökningen av kärnan i det svenska energiskattesystemet, nämligen koldioxidskatten och energiskatten och vissa befrielser från och nedsättningar av dessa.

Kommissionen fattade i december 2002 ⁽³⁾ ett beslut om en nedsättning av koldioxidskatten för bränslen som används för uppvärmning vid tillverkningsprocesser hos tillverkningsföretag inom vissa sektorer. Vid undersökningen framgick dock att den svenska koldioxidskatten endast utgör en del av det svenska energiskattesystemet och att den är intimt knuten till andra delar, särskilt energiskatten på bränsle. Koldioxidskatten kan därför inte granskas för sig, utan energiskattesystemet måste granskas som en helhet.

I en skrivelse av den 6 januari 2003 begärde kommissionen därför ytterligare upplysningar, vilket de svenska myndigheterna lämnade i en skrivelse av den 27 februari 2003, registrerad den 28 februari 2003.

Ärendet diskuterades närmare vid ett möte i Stockholm den 20–21 januari 2003 mellan företrädare för GD Konkurrens och finans-, industri- och miljödepartementet. Informella möten hölls också i Bryssel den 7 mars och den 3 april 2003.

Upplysningarna har lett till att kommissionen har gjort en ny bedömning av den generella återbetalningen av koldioxidskatt till tillverkningsindustrin. Detta beslut ersätter därför kommissionens beslut om statligt stöd NN 3/A/2001 och NN 4/A/2001 – Sverige från december 2002 om den nedsättning på 75 procent av koldioxidskatten som tillverkningsindustrin åtnjuter.

2. DETALJERAD BESKRIVNING AV ÅTGÄRDEN

Det svenska systemet med miljö- och energibaserade skatter omfattar flera olika typer av skatter. De viktigaste är koldioxidskatten och energiskatten, som båda tas ut på fossila bränslen. Ekonomiskt sett är koldioxidskatten den viktigaste. Energiskatt tas också ut på el.

Energiskatten infördes 1957. Den tas ut på el och fossila bränslen som används bland annat för uppvärmning och skall betalas i sin helhet av hushållen, tjänsteföretag samt av tillverkningsföretag när det gäller bränsle som används för uppvärmning som inte utgör ett led i tillverkningsprocessen.

Koldioxidskatten infördes i juli 1991 och ändrades 1993 för att den bättre skulle överensstämma med energiskattesystemet. Koldioxidskatt tas ut på fossila bränslen som används bland annat för uppvärmning och skall betalas i sin helhet av hushållen, tjänsteföretag och av tillverkningsföretag när det gäller bränsle som används för uppvärmning som inte utgör ett led i tillverkningsprocesser.

Tillverkningsindustrin befriad från energiskatt

Företag inom vissa tillverkningssektorer (NACE rev. 1, avsnitt A–D) är helt befriade från energiskatt på bränsle och el som används för uppvärmning i tillverkningsprocesserna ⁽⁴⁾. Skattebefrielsen infördes i sin nuvarande form den 1 januari 1993, dvs. innan Sverige anslöt sig till EES och EU. Den har inte ändrats sedan dess.

De svenska myndigheterna uppskattar att denna åtgärd leder till en årlig förlust av skatteintäkter på cirka 1 000 miljoner

⁽¹⁾ DO L 83 de 27.3.1999, p. 1.

⁽²⁾ DO C 37 de 3.2.2001, p. 3.

⁽³⁾ NN 3/A/2001 och NN 4/A/2001 – Sverige (EGT C 104, 30.4.2003, s. 9).

⁽⁴⁾ Befrielsen gäller också växthusföretag. Kommissionen kommer att fatta ett separat beslut om befrielsen för sådana företag.

kronor (cirka 110 miljoner euro) när det gäller energiskatten på bränsle och 1 500 miljoner kronor (cirka 165 miljoner euro) när det gäller befrielsen från energiskatt på el.

Den 75-procentiga nedsättningen av koldioxidskatten för tillverkningsindustrin

Sedan 1993 har tillverkningsindustrin fått koldioxidskatten nedsatt med 75 procent för bränslen som används i tillverkningsprocesser. Procenttalet har varierat under åren men aldrig överstigit 75 procent.

De svenska myndigheterna uppskattar att denna åtgärd leder till en årlig förlust av skatteintäkter på cirka 1 000 miljoner kronor (cirka 110 miljoner euro).

Den regionalt differentierade energiskattesatsen på el till förmån för tjänstesektorn

Hushåll och tjänsteföretag i norra Sverige har sedan 1981 betalat en lägre energiskatt på el. El utgör cirka 30 procent av värmemarknaden i Sverige och syftet med åtgärden är att sänka skatten på värme i norra delen av landet, där värmekostnaderna är relativt höga. Åtgärden gäller stödområden enligt artikel 87.3 c i EG-fördraget.

Den andel av hela skatten som betalas av dem som omfattas av denna åtgärd låg stabilt på 41 procent under perioden 1993–1995 och har sedan dess ökat stadigt till 74 procent 2003.

I tabellen nedan finns en översikt över energiskatten och koldioxidskatten och de befrielser från och nedsättningar av dessa som är föremål för detta beslut.

	Koldioxidskatt på bränsle för uppvärmning	Energiskatt på bränsle för uppvärmning	Energiskatt på el för uppvärmning
Hushåll och tjänstesektorn	0 % (full skatt)	0 % (full skatt)	0 % (full skatt)
Tillverkningsföretag för uppvärmning i tillverkningsprocesser	75 % (betalar 25 %)	100 % (ingen skatt)	100 % (ingen skatt)
Hushåll och tjänstesektorn i norra delen av landet	0 % (full skatt)	0 % (full skatt)	26 % (betalar ca 74 %)

Ordningens varaktighet: Sverige ansöker om godkännande till och med den 31 december 2005.

3. BEDÖMNING

3.1 Inslag av statligt stöd enligt artikel 87.1 i EG-fördraget

Alla skattebefrielser och nedsättningar som beskrivs ovan utgör en ekonomisk fördel för mottagarna, som befriar dem från kostnader som de normalt betalar ur driftsbudgeten. Åtgärderna leder till en förlust av skatteintäkter och finansieras därmed med statliga medel. Befrielsen från energiskatt och den generella nedsättningen av koldioxidskatten omfattar endast tillverkningsindustrin och denna åtgärd är därför selektiv. Den regionalt differentierade skattesatsen på el omfattar endast tjänstesektorn och endast vissa områden. Båda dessa faktorer innebär att åtgärden är selektiv. De företag som omfattas av åtgärderna är verksamma på marknader där det förekommer handel mellan medlemsstater. Därmed snedvrider eller hotar stödet att snedvrider konkurrensen på den inre marknaden och det utgör därför statligt stöd i den mening som avses i artikel 87.1 i EG-fördraget.

3.2 Stödets förenlighet med artikel 87.3 c i EG-fördraget

3.2.1 Bedömningsperioder och rättslig grund för bedömningen

I artikel 1 b i i rådets förordning (EG) 659/1999 av den 22 mars 1999 om tillämpningsföreskrifter för artikel 93 i EG-fördraget ⁽⁵⁾ (procedurförordningen) defi-

nieras befintligt stöd på följande sätt: "utan att det påverkar tillämpningen av artiklarna 144 ⁽⁶⁾ och 172 i anslutningsakten för Österrike, Finland och Sverige, allt stöd som fanns innan fördraget trädde i kraft i respektive medlemsstat, det vill säga stödordningar och individuellt stöd som infördes före och som fortfarande är tillämpliga efter det att fördraget har trätt i kraft".

I artikel 172.5 i anslutningsakten anges följande: "statligt stöd, som en ny medlemsstat har beviljat under år 1994 och som den i strid med EES-avtalet eller arrangemang enligt det avtalet inte har anmält till EFTA:s övervakningsmyndighet eller som den har anmält dit men lämnat före det att EFTA:s övervakningsmyndighet fattat beslut i saken, skall inte anses som "förekommande" stöd i medlemsstaten i den mening som avses i Romfördragets artikel 93.1".

I detta fall har de bestämmelser genom vilka befrielse från energiskatt beviljades varit i kraft oförändrade sedan 1993. Den regionala differentieringen av energiskatten på el för tjänstesektorn hade införts redan före det förhållande mellan den lägre och den fulla skattesatsen var oförändrat under perioden 1993–1995. Vid anslutningen utgjorde därför båda åtgärderna befintligt (förekommande) stöd ⁽⁷⁾.

⁽⁶⁾ Artikel 144 i anslutningsakten gäller statligt stöd till jordbruket.

⁽⁷⁾ Domstolens dom av den 15 mars 1994 i mål C-387/92, Banco Crédito Industrial SA, nu Banco Exterior de España SA vs. Ayuntamiento de Valencia, Rec. 1994, s. I-00877.

⁽⁵⁾ EGT L 83, 27.3.1999, s. 1.

Senast den 1 januari 2002 skulle alla befintliga miljöstödsordningar ha ändrats så att de var förenliga med de gällande gemenskapsriktlinjerna för statligt stöd till skydd för miljön⁽⁸⁾ (riktlinjerna) (punkt 77 i riktlinjerna).

Den generella befrielsen från koldioxidskatten trädde i kraft 1993 och därmed före den 1 januari 1994. Vid anslutningen utgjorde stödet i fråga därför befintligt stöd. Definitionen av nytt stöd i procedurförordningen (se artikel 1 c) inbegriper ändringar av befintligt stöd. För nytt stöd gäller det anmälningsskrav som fastställs i artikel 88.3 i EG-fördraget. Alla ändringar av befintligt stöd skall därmed anmälas till kommissionen. Skattnedsättningen ökades betydligt från och med den 1 januari 2001 och kommissionen anser att ökningen var så stor att åtgärden måste bedömas som en ny åtgärd.

Av de skäl som anges nedan anser kommissionen att befrielsen från energiskatt på fossila bränslen och ned-

sättningen av koldioxidskatten till förmån för tillverkningsindustrin skall bedömas som en enda åtgärd.

Eftersom det för ett av de två inslagen i åtgärden skulle ha krävts en anmälan från och med den 1 januari 2001, bedömer kommissionen de två inslagens förenlighet från och med detta datum. Vid bedömningen tillämpar kommissionen 1994 års riktlinjer för statligt stöd till skydd för miljön⁽⁹⁾ (1994 års riktlinjer) för perioden 1 januari 2001–2 februari 2001 och för perioden från och med den 3 februari 2001 de gällande riktlinjerna för statligt stöd till skydd för miljön (se punkt 82 i riktlinjerna).

Den regionala differentieringen av energiskatten på el till förmån för tjänstesektorn bedöms enligt de gällande riktlinjerna från och med den 1 januari 2002.

Befrielsen från energiskatt på el bedöms enligt de gällande riktlinjerna från och med den 1 januari 2002.

	Läge vid anslutningen	Ändringar mellan 1.1.1995 och 31.12.2001	Läge den 1 januari 2002
Befrielse från energiskatt på bränsle till förmån för tillverkningsindustrin	Befintligt stöd	Inga ändringar	Skall vara förenlig med 2001 års riktlinjer från och med den 3 februari 2001
75-procentig nedsättning av koldioxidskatten till förmån för tillverkningsindustrin	Befintligt stöd	1.1.2001 – skall vara förenlig med 1994 års riktlinjer tills dess att 2001 års riktlinjer trädde i kraft	
Befrielse från energiskatt på el till förmån för tillverkningsindustrin	Befintligt stöd	Inga ändringar	Skall vara förenlig med 2001 års riktlinjer
Regionalt differentierad energiskatt på el till förmån för tjänstesektorn	Befintligt stöd	Inga ändringar	Skall vara förenlig med 2001 års riktlinjer

3.2.2 Fullständig befrielse från energiskatten på bränslen och en 75-procentig nedsättning av koldioxidskatten för tillverkningsindustrin fr.o.m. den 1 januari 2001 t.o.m. den 31 december 2005

Kommissionen betraktar de båda skatterna som en enda skatt

Även om den föreslagna behandlingen i skattehänseende består av a) införandet av en 75-procentig nedsättning av koldioxidskatten och b) befrielse från energiskatt, det vill säga två olika skatter, anser kommissionen att det är motiverat att betrakta de båda skatterna och undantagen från dem som en enda skatt.

I Sverige omfattas fossila bränslen som används för uppvärmningsändamål av energiskatt och koldioxidskatt. Eftersom de båda skatterna tas ut på samma grunder fungerar de i praktiken som en enda skatt med två olika beståndsdelar. Bestämmelserna om uppbörd och betalningsskyldighet samt kontrollbestämmelserna är desamma.

Inte endast koldioxidskatten utan också energiskatten har en styrande miljöfrämjande effekt på förbrukningen av bränslen. Därför skall båda skatterna ses som ekonomiska instrument för att uppnå miljöskyddsmål, i synnerhet att minska koldioxidutsläppen⁽¹⁰⁾. För att uppnå den önskade styrande effekten har den svenska regeringen under åren ändrat nivån på antingen energiskatten eller koldioxidskatten.

Tanken på ett övergripande energiskattesystem fick konkret form när de olika befintliga lagarna om energibeskattningskonsoliderades i en enda lag, lagen om skatt på energi (1994:1776), som trädde i kraft den 1 januari 1995. Detta framgår också av den information om skatteåterbäring som skickats ut till skattebetalarna, där de båda skattekomponenterna presenteras tillsammans och där det också anges vilken den totala skatten per enhet är för olika bränslen.

⁽⁸⁾ EGT C 37, 3.2.2001, s. 3.

⁽⁹⁾ EGT C 72, 10.3.1994, s. 3.

⁽¹⁰⁾ Koldioxidskattesatserna beror på bränslets koldioxidhalt. Energiskattesatserna har inget direkt samband med koldioxidhalten i ett bränsle, men kommissionen anser att det i de svenska förhållandena finns ett tydligt direkt samband mellan bränsleförbrukning och koldioxidutsläpp.

Kommissionen godtar därför Sveriges ståndpunkt att det följer av det svenska energibeskattningsystemets allmänna struktur att energiskatten och koldioxidskatten på bränslen bör bedömas tillsammans. Dessutom konstaterar kommissionen att syftet med skatterna inte är att nå särskilda miljömål, t.ex. att minska olika utsläpp, vilket skulle särskilja skatterna utifrån deras syfte trots att de tas ut för samma produkt.

Kommissionen anser vidare att medlemsstaterna för närvarande tillåts lägga ihop alla olika skatter de tar ut för ett visst bränsle i syfte att följa de minimiskattesatser som föreskrivs i rådets direktiv 92/82/EEG av den 19 oktober 1992 om tillnärmning av punktskattesatser för mineraloljor ⁽¹⁾. Därför kan Sverige följa direktivet även om det inte finns någon energiskatt på fossila bränslen som industrin använder i tillverkningsprocesser.

I artikel 4.2 i utkastet till energiskattedirektiv definieras "skattenivå" dessutom som "det samlade belopp som påförts i form av alla indirekta skatter (med undantag av moms) som räknats fram direkt eller indirekt på basis av förbrukad produktkvantitet". Redan i det förslag till rådsdirektiv som kommissionen lade fram 1997 ⁽²⁾ talades det om "det samlade belopp som påförts i form av alla indirekta skatter". Under tiden har rådet nått politiskt samförstånd ⁽³⁾ om utkastet till energiskattedirektiv. Att lägga ihop alla skatter som tas ut för ett visst bränsle är därför fullständigt förenligt med EU:s politik på området för energibeskattnings.

Bedömning mot bakgrund av 1994 års riktlinjer för perioden 1.1.2001–2.2.2001

Enligt punkt 3.4 i 1994 års riktlinjer kan en tillfällig befrielse från nya miljöskatter godkännas om det är nödvändigt för att kompensera för förlorad konkurrenskraft, särskilt på internationell nivå. Sådant stöd får bara kompensera för extra produktionskostnader jämfört med traditionella kostnader och det bör vara tillfällig och i princip minska successivt.

Syftet med skattenedsättningen är att bevara konkurrenskraften för relativt energiintensiva industriföretag. Det råder ingen tvekan om att införandet av energiskatter på nationell nivå ökade driftskostnaderna för dessa företag i en omfattning som påverkade deras konkurrenskraft på den inre marknaden.

Med tanke på den korta period som skall bedömas mot bakgrund av 1994 års riktlinjer är det en irrelevant fråga om stödet var tillfälligt eller inte.

Kommissionen konstaterar slutligen att de flesta nedsättningar av koldioxidskatter som kommissionen god-

känt med stöd av 1994 års riktlinjer inte har varit successivt minskande.

Stödmottagarna betalar fortfarande mellan 19 % och 24 % av skatten. Sverige lämnade upplysningar enligt vilka nedsättningen av koldioxidskatten 2001 var endast 65 %, så de andelar av de totala skatterna som betalades var större. Skatten i sig ger därför stödmottagarna ett incitament att minska sin energiförbrukning. Eftersom stödmottagarna har ett incitament att minska sin energiförbrukning anser kommissionen att det finns en motpart på det sätt som krävs i 1994 års riktlinjer. Den andel som företagen fortfarande betalar garanterar också att skattenedsättningarna inte innebär att extrakostnader överkompenseras, eftersom företagen fortfarande omfattas av ett nettoskatteuttag.

Kommissionen anser därför att stödet är förenligt med artikel 87.3 c i fördraget.

Bedömning mot bakgrund av riktlinjerna för perioden 3.2.2001–1.12.2005

Skatterna i fråga har bedömts mot bakgrund av punkterna 51.2 och 51.1 b i avsnitt E.3.2 om driftsstöd i form av skattenedsättningar eller skattebefrielser.

I punkt 51.2 i riktlinjerna hänvisas det till tillämpningen av punkt 51.1, om befintliga skatter har en betydande positiv effekt när det gäller miljöskydd. De svenska myndigheterna beräknar att miljöskatterna kommer att bidra till att koldioxidutsläppen kan minskas med 22,5 % fram till 2010. Energiskatterna bidrar således till denna betydande positiva effekt när det gäller miljöskydd (punkt 51.2 a).

Vidare krävs det i punkt 51.2 b i riktlinjerna att beslutet om ett undantag för företagen i fråga fattades när skatten antogs. Kommissionen konstaterar i detta fall att en fullständig befrielse från energiskatt och koldioxidskatt planerades redan innan Sverige anslöt sig till Europeiska unionen 1995. Kommissionen anser därför att detta kriterium uppfylls.

Enligt punkt 51.1 b första strecksatsen i riktlinjerna kan kommissionen godkänna undantag från miljöskatter för upp till tio år, om nedsättningen avser en gemenskapsavgift och det belopp som företagen faktiskt betalar efter nedsättningen är betydligt högre än gemenskapens minimibelopp. Kommissionen noterar att de minimiskattesatser för mineraloljor som anges i rådets direktiv 92/82/EEG av den 19 oktober 1992 om tillnärmning av punktskattesatser för mineraloljor ⁽⁴⁾ alltid kommer att följas. De svenska myndigheterna uppfyller detta kriterium, eftersom den energiskatt och den koldioxidskatt som tas ut på mineraloljor kan läggas ihop enligt direktivet. För gasol som används som bränsle vid värmeproduktion förutser direktivet en nollskattesats.

⁽¹⁾ EGT L 316, 31.10.1992, s. 19.

⁽²⁾ EGT C 139, 6.5.1997, s. 14.

⁽³⁾ Rådskommunikation nr 15354/1/02, 9.12.2002.

⁽⁴⁾ EGT L 316, 31.10.1992, s. 19.

Med stöd av punkt 51.1 b andra strecksatsen kan kommissionen också godkänna undantag från miljöskatter för upp till tio år om nedsättningen avser en nationell avgift i avsaknad av en gemenskapsavgift och de företag som beviljats nedsättningen likväl betalar en betydande del av den nationella avgiften. De svenska myndigheterna lämnade upplysningar enligt vilka stödmottagarna betalar mellan 19 % och 24 % av den totala skattebelastningen, beroende på bränsle. Det är en konsekvens av att koldioxidskatten är betydligt högre än energiskatten.

Bränsle	Andel av koldioxidskatten som betalas	Andel av energiskatten som betalas	Andel av den totala skatten som betalas 2003
Olja	25 %	0 %	19 %
Naturgas	25 %	0 %	22 %
Gasol	25 %	0 %	24 %
Kol/koks	25 %	0 %	22 %

Kommissionen anser att stödmottagare vilkas bränsleanvändning inte omfattas av mineraloljedirektivet betalar 22 %, vilket utgör en betydande del av skatterna.

Kommissionen anser därför att stödet är förenligt med artikel 87.3 c i EG-fördraget till och med den 31 december 2005.

3.2.3 Befrielse från energiskatten på el för tillverkningsindustrin från och med den 1 januari 2002 till och med den 31 december 2005

Energiskatten på el måste bedömas i sig själv, inte i förbindelse med någon annan energiskatt såsom koldioxidskatten. Dels är skattesatsen för den senare inte beroende av förbrukningen. Dels kan det påpekas att över nittio procent av den elkraft som alstras i Sverige kommer från kärn- och vattenkraftverk. Elskatten påverkar alltså inte koldioxidutsläppen på samma sätt som skatterna på fossila bränslen och kan alltså inte bedömas tillsammans med dessa eller med koldioxidskatten⁽¹⁵⁾. Elskatten måste alltså bedömas separat.

Energiskatten på el infördes i Sverige 1957, långt före EES-medlemskapet 1994 och EU-medlemskapet 1995. Full befrielse från elskatten för företag inom vissa tillverkningsområden infördes den 1 januari 1993, alltså före Sveriges inträde i EES och EU. Eftersom skatten var oförändrad perioden 1993–95 har åtgärden utgjort befintligt stöd fram till den 31 december 2001.

Alla befintliga miljöstödsordningar skulle ändras så att de blev förenliga med de nuvarande riktlinjerna senast den 1 januari 2002 (punkt 77). Enligt punkt 51.2 i dessa får bestämmelserna i punkt 51.1 tillämpas på befintliga avgifter, om dessa har en betydande positiv effekt när det gäller miljöskydd och undantagen hade

beslutats i samband med att avgiften infördes. Energiskatten på el uppfyller dessa båda villkor, och skatten skall alltså bedömas enligt punkt 51.1 i riktlinjerna.

Enligt punkt 51.1 b andra strecksatsen i riktlinjerna får kommissionen bevilja undantag från miljöavgifter i upp till tio år, om nedsättningen avser en nationell avgift i avsaknad av en gemenskapsavgift och de företag som beviljats nedsättningen likväl betalar en betydande del av den nationella avgiften. Eftersom befrielsen från elskatten är 100 % betalar mottagarna inte någon betydande del.

De övriga villkoren i punkt 51.1 i riktlinjerna förefaller inte heller vara uppfyllda i detta fall. Kommissionen anser därför i detta skede av bedömningen att stödet inte är förenligt med artikel 87.3 c i EG-fördraget.

3.2.4 Den regionalt differentierade energiskatten på el för tjänstesektorn från och med den 1 januari 2002 till och med den 31 december 2005

Den regionala differentieringen av energiskatten på el har ett regionalstödssyfte men kan ändå godkännas enligt riktlinjerna. Undantaget föreskrevs när Sverige gick med i EES och EU, och mottagarna har alltid betalt en betydande del av den statliga skatten. Andelen uppgick under 2003 till 74 % och har aldrig varit lägre än 41 % (punkt 51.2 och 51.1 b andra strecksatsen).

3.2.5 Bedömning avseende den tidigare EKSG stålindustrin före utgången av EKSG-fördraget den 23 juli 2000

I den utsträckning som undantagen även omfattade den tidigare EKSG-stålindustrin för tiden innan utgången av EKSG-fördraget den 23 juli 2002 beaktar kommissionen kommissionens meddelande om vissa förändringar i handläggningen av konkurrensärenden till följd av att EKSG-fördraget löper ut (kommunikationen)⁽¹⁶⁾.

Med beaktande av den 100-procentiga befrielsen från skatt på bränsle och den 75-procentiga befrielsen från koldioxidskatten för tillverkningsindustrin, utgjorde ordningen förekommande stöd till och med den 31 december 2000.

Punkt 44 i kommunikationen anger följande:

Då beslut fattas efter den 23 juli 2002 om statligt stöd som genomförts senast den dagen utan kommissionens förhandstillstånd, kommer kommissionen att gå vidare i enlighet med kommissionens tillkännagivande om vilka regler som är tillämpliga för att avgöra om ett statligt stöd är olagligt⁽¹⁷⁾. Enligt detta tillkännagivande skall kommissionen alltid bedöma om olagligt statligt stöd är förenligt med den gemensamma marknaden enligt de materiella kriterier som fastställs i något av de instrument som gällde när stödet beviljades.

⁽¹⁵⁾ En skatt på elektricitet har dock positiva miljömässiga styreffekter med tanke på energisparande och energieffektivitet.

⁽¹⁶⁾ EGT C 152, 26.6.2002, s. 5.

⁽¹⁷⁾ EGT C 119, 22.5.2002, s. 22.

Följaktligen skall åtgärderna bedömas, på så sätt som skulle ha varit fallet enligt beslut 2496/96 EKSG⁽¹⁸⁾ av den 18 december 1996 om gemenskapsregler för statligt stöd till stålindustrin (stålstödsreglerna), i enlighet med punkten 3.4 i 1994 års riktlinjer för statligt stöd till skydd för miljön⁽¹⁹⁾. Enligt punkt 3.4 är kriteriet för att tillåta sådana skattebefrielser som utgör driftstöd att de bara får kompensera för extra produktionskostnader jämfört med sedvanliga kostnader samt att de måste vara tillfälliga och i princip degressiva.

Rörande den 100-procentiga befrielsen från energiskatten på bränsle och den 75-procentiga befrielsen från koldioxidskatten för tillverkningsindustrin, hänvisar kommissionen för perioden 1 januari 2001 till den 23 juli 2002 till bedömningen ovan där båda skatterna bedöms gemensamt. Härvidlag, noterar kommissionen att stödelementen inte utgör en fullständig befrielse från den totala lagstadgade skatteökningen då företagen själva fortfarande betalar en del. Följaktligen sker det ingen överkompensation. Vidare noterar kommissionen att skattebefrielsen är av en tillfällig natur då undantaget omfattar tidsperioden från den 1 januari 2001 till utgången av EKSG-fördraget den 23 juli 2002. Slutligen noterar kommissionen att undantag enligt punkten 3.4 i princip skall vara degressiva. Punkten 3.4 förutser således möjligheten att ge undantag från denna bestämmelse när så är lämpligt. I det aktuella fallet innehåller inte stödet något degressivt element förutom det faktum att den underliggande logiken bakom stödet är att det är tillfälligt. Trots detta har kommissionen beslutat att bevilja stödet, särskilt med beaktande av kommissionens praxis rörande tolkningen av denna del av punkt 3.4. Därför anser kommissionen att stödet är förenligt med 1994 års riktlinjer. Avseende perioden efter den 23 juli 2002 hänvisar kommissionen till bedömningen av den EG-relaterade delen av ordningen och bedömer att stödet är kompatibelt med de nuvarande miljöriktlinjerna.

Om befrielsen från energiskatten på elektricitet för tillverkningsindustrin omfattar tidigare EKSG-stålindustri för perioden fram till utgången av EKSG-fördraget den 23 juli 2002, utgör skattebefrielsen statligt stöd fram till den 23 juli 2002. Med tillämpning av punkt 19 i ovan nämnda kommunikation skall skattebefrielsen från den 24 juli 2002 bedömas enligt de nuvarande miljöriktlinjerna. Av samma skäl som lämnats ovan avseende EG-sektorerna, ifrågasätter kommis-

sionen åtgärdens förenlighet med statsstödsreglerna även för åtgärden i den utsträckning den omfattar den tidigare EKSG-stålindustrin.

4. SLUTSATS

Av ovanstående skäl har kommissionen inga invändningar mot den beskrivna nedsättningen av koldioxidskatten och energiskatten på fossila bränslen för tillverkningssektorn. Kommissionen har heller inga invändningar mot den regionalt differentierade elskatten för tjänstesektorn. Däremot har kommissionen beslutat att inleda det formella granskningsförfarandet enligt artikel 88.2 i EG-fördraget i fråga om den fulla skattebefrielsen för elektricitet för tillverkningssektorn.

Detta beslut påverkar inte bedömningen av åtgärdernas kompatibilitet med det kommande energiskattedirektivet som förväntas träda i kraft den 1 januari 2004. Kommissionen påminner Sverige om att den kan föreslå de åtgärder som behövs för att säkerställa åtgärdernas kompatibilitet.

Utifrån dessa överväganden uppmanar kommissionen enligt förfarandet i artikel 88.2 i EG-fördraget Sverige att lägga fram sina synpunkter och lämna alla de upplysningar som kan vara av värde för bedömningen av befrielsen från energiskatt på el för tillverkningsindustrin från och med den 1 januari 2002 till och med den 31 december 2005, inom en månad från dagen för mottagandet av denna skrivelse. Kommissionen uppmanar också de svenska myndigheterna att genast sända kopior av brevet till tänkbara stödmottagare.

Kommissionen vill påminna Sverige om att artikel 88.3 i EG-fördraget har uppskjutande verkan och vill också peka på artikel 14 i rådets förordning (EG) nr 659/1999, enligt vilken allt olagligt stöd kan återkrävas från mottagaren.

Kommissionen vill fästa Sveriges uppmärksamhet på att den kommer att underrätta berörda parter genom att offentliggöra denna skrivelse och en sammanfattning av den i *Europeiska unionens officiella tidning*. Den kommer också att underrätta berörda parter i de Eftaländer som är avtalslutande parter i EES-avtalet genom att offentliggöra ett tillkännagivande i EES-supplementet till EUT, samt Eftas övervakningsmyndighet genom att skicka en kopia av denna skrivelse. Samtliga ovannämnda berörda parter kommer att uppmanas att inkomma med synpunkter inom en månad från dagen för respektive offentliggörande.»

⁽¹⁸⁾ EGT L 388, 28.12.1996, s. 42.

⁽¹⁹⁾ EGT C 72, 10.3.1994, s. 3.

AYUDAS ESTATALES — AUSTRIA

Invitación a presentar observaciones, en aplicación del apartado 2 del artículo 88 del Tratado CE, sobre la ayuda C 44/03 (ex NN 158/01) — Ayuda a la reestructuración del Banco Burgenland AG

(2003/C 189/04)

(Texto pertinente a efectos del EEE)

Mediante carta de 26 de junio de 2003 que se reproduce en la lengua auténtica a continuación del presente resumen, la Comisión comunicó a Austria su decisión de incoar el procedimiento previsto en el apartado 2 del artículo 88 del Tratado CE con respecto a la medida de ayuda antes mencionada.

Las partes interesadas podrán presentar sus observaciones sobre la ayuda en el plazo de un mes a partir de la fecha de publicación del presente resumen y de la carta siguiente, enviándolas a:

Comisión Europea
Dirección General de Competencia
Dirección H
B-1049 Bruxelles/Brussel
Fax (32-2) 296 12 42.

Dichas observaciones serán comunicadas a Austria. La parte interesada que presente observaciones podrá solicitar por escrito, exponiendo los motivos de su solicitud, que su identidad sea tratada confidencialmente.

RESUMEN

Procedimiento y antecedentes

Mediante carta de 28 de junio de 2000, de conformidad con el artículo 10 del Tratado CE, Austria informó a la Comisión sobre las dificultades financieras que atravesaba EG e HYPO-Bank Burgenland AG (BB), así como las medidas concedidas por el *Land* de Burgenland. Con posterioridad, tuvieron lugar varias discusiones con las autoridades austriacas para aclarar los hechos desde el punto de vista de la ayuda estatal.

Mediante carta de 18 de junio de 2002, las autoridades austriacas notificaron la existencia de dos garantías concedidas por el *Land* de Burgenland y transmitieron un plan de reestructuración. Por cartas de 3 de julio y de 9 de septiembre de 2002, las autoridades austriacas enviaron información adicional.

El BB es un banco regional registrado en Eisenstadt, cuyas actividades se concentran en el *Land* de Burgenland. Su principal accionista es dicho *Land* con el 97,897 %. En el año 2000, BB tenía un balance financiero total de 2,7 mil millones de euros y, por lo tanto, se situaba en el trigésimo tercer lugar entre todos los bancos en Austria. Desde 1920, el BB se ha beneficiado de un «Ausfallhaftung» (garantía pública) del *Land*. Esto significa que el *Land* tendría que intervenir si, en el caso de liquidación o quiebra, los activos del banco no fueran suficientes para cubrir sus compromisos. Desde 1998, el *Land* ha recibido una prima de garantía del Banco.

Debido a las acciones penales de un cliente importante, HOWE Bau AG, el Banco debió proceder a ajustes de valor en relación con los préstamos por una cantidad de 170,8 millones de euros. Como no era posible prever dichas acciones penales, no se estableció por adelantado ningún depósito para hacer

frente a las demandas. Sobre la base de un capital de primer orden de 80 millones de euros, las demandas habrían supuesto la insolvencia del BB. En este caso, se habría apelado al *Ausfallhaftung* del *Land* dando lugar a la quiebra y a unos pagos estimados de 247 millones de euros. El 20 de junio de 2000, el *Land* concedió la primera garantía. Tras el caso de fraude, un examen detallado de la cartera de préstamos mostró la existencia de préstamos morosos adicionales por valor de 189 millones (incluidos 29 millones de euros del caso HOWE). El 23 de octubre de 2000, el *Land* concedió la segunda garantía.

Descripción de las medidas de la ayuda estatal

Primera garantía 20 de junio de 2000: Para evitar la quiebra del BB, así como los pagos de importantes sumas en virtud del *Ausfallhaftung*, el *Land* concedió una garantía explícita limitada, que cubría las demandas incobrables. Esta garantía evitó la quiebra y permitió que el Banco siguiera operando. La garantía solamente sería accesible tras diez años y debería haberse reducido para entonces consignando los préstamos morosos en el importe de los beneficios anuales. En el mejor de los escenarios, la garantía no supondría ningún pago por parte del *Land*.

Segunda garantía 23 de octubre de 2000: Para permitir que el Banco siga operando incluso después de la detección de los préstamos morosos adicionales, los principales accionistas *Land* Burgenland y Bank Austria concluyeron el siguiente acuerdo: el Banco de Austria renunció a sus préstamos por un importe de aproximadamente 125 millones de euros a cambio de una demanda para el reembolso de los beneficios futuros (*better fortune clause* — cláusula de prosperidad). La cantidad se pagará a plazos con sus intereses durante siete años a partir del 30 de junio de 2004. El Banco de Austria cederá sus acciones del Banco Burgenland (34 %) al *Land* por 1 un chelín austriaco. El

Land concedió una garantía similar a la de junio, cubriendo los préstamos morosos adicionales.

Evaluación de las medidas de ayuda estatal

Las medidas constituyen claramente una ayuda porque el Banco se vio favorecido al poder continuar su actividad empresarial en vez de declararse en quiebra, además de cumplirse todos los otros requisitos del apartado 1 del artículo 87 del Tratado CE. Constituyen nueva ayuda porque las garantías públicas (*Ausfallhaftung*) podían solamente pagarse después de la quiebra y no antes para mantener la actividad empresarial del Banco, según la opinión de Austria. Las nuevas medidas van más allá de esto. No se aplican ni las letras a), b), d) o e) del apartado 3) ni el apartado 2 del artículo 87. Se deben evaluar las condiciones fijadas en las directrices de reestructuración basadas en la letra c) del apartado 3 del artículo 87.

a) Empresas que pueden recibir las ayudas

El BB puede sin ninguna duda ser considerado como empresa en crisis.

b) Restablecimiento de la viabilidad

Las autoridades austriacas transmitieron un plan de reestructuración que aspira principalmente a la gestión de los riesgos de crédito. Como la crisis del BB vino causada por un fraude exterior era necesario reforzar el sistema de auditoría interna. Además, sólo debería reducirse un número limitado de personal. Por otra parte, el BB debería ser privatizado; se han tomado ya las primeras medidas. El proceso de privatización debería concluirse a finales de 2004.

Sobre la base de la información de que dispone la Comisión actualmente, tiene dudas sobre la evolución del mercado y el pronóstico de unos rendimientos financieros anuales del 15 % hasta el año 2010. La Comisión pide, por lo tanto, a Austria que proporcione información adicional referente a los mercados de clientes privados y comerciales en los que el BB estará presente en el futuro y el fundamento de sus pronósticos. Austria mencionó solamente una razón de fraude, en concreto la mala gestión de los riesgos de crédito. Pero no ha sido un análisis detallado de las estructuras de la empresa y de la gestión. Esto sería necesario para cualificar las medidas de reestructuración. La Comisión, por lo tanto, duda de si el plan de reestructuración es eficaz. Además, la Comisión solicita detalles sobre el proceso de privatización (situación actual, procedimiento y calendario).

c) Prevención de falseamientos indebidos de la competencia

Austria menciona que el BB es, comparado con otros casos de reestructuración bancaria (Banco di Napoli, Banco di Sicilia y Crédit Lyonnais), el Banco más pequeño (por lo que se refiere al tamaño así como a la cuota de mercado

nacional), con el que se ha encontrado la Comisión hasta el presente. Además, las actividades del BB se limitan al núcleo de las actividades bancarias de un Banco regional (concesión de préstamos, cuentas de ahorros de clientes al por menor) mientras que los bancos en anteriores casos de reestructuración eran activos en más ámbitos dentro de los servicios financieros. Por lo tanto, el BB no puede ofrecer una gran contrapartida como otros Bancos.

El BB reducirá su participación desde los 13,3 millones de euros a finales de 1999 a 7,8 millones de euros (mediados de año 2002). Además, el BB cerrará una de sus filiales a principios del año 2003 y por tanto verá reducida su presencia en el mercado. El BB también reducirá ciertas actividades, especialmente los préstamos al Estado, que alcanzan un valor de 120 millones de euros y que son un instrumento importante del Banco para aumentar su volumen de créditos.

Puesto que la descripción de las medidas es en parte muy vaga y no indica a menudo su estimación en cifras ni porcentajes por lo que se refiere al total del balance, la Comisión ha solicitado a Austria más detalles. Además, no existe apenas ninguna indicación sobre el efecto de las medidas de contrapartida en la posición futura del Banco.

d) Ayuda circunscrita al mínimo

Austria reivindica que el Estado nunca concedió liquidez sino solamente dos garantías. Estas garantías contribuyen a que el Banco alcance la máxima expansión de sus posibilidades. Además, los mecanismos específicos de supervisión y control garantizan que el BB reembolsará todo lo que le sea posible.

Como contrapartida, el BB ofrece reducir sus plusvalías. Ya el balance del año 2001 mostraba que el Banco apenas tenía plusvalías. Además, se han tomado varias medidas para reducir el personal.

Puesto que las garantías tienen en la práctica un efecto similar al de la liquidez, la Comisión no está todavía en condiciones de juzgar si la ayuda se limita realmente al mínimo.

Conclusiones

A la vista de los interrogantes que se plantean en cuanto al restablecimiento de la viabilidad, las medidas de compensación así como las cuestiones referentes a la limitación de la ayuda al mínimo necesario, la Comisión tiene dudas, sobre la base de la información actual, acerca de la compatibilidad de la ayuda. La Comisión solicita, por lo tanto, a Austria que le remita un dictamen en el que incluya toda la información necesaria y útil para la valoración de las medidas de ayuda en el plazo de un mes a partir del recibo de la presente.

CARTA

«Die Kommission möchte Österreich davon in Kenntnis setzen, dass sie nach Untersuchung der von Ihren Behörden erteilten Informationen bezüglich der oben genannten staatlichen Beihilfemaßnahmen beschlossen hat, das in Artikel 88 Absatz 2 des EG-Vertrags vorgeschriebene Verfahren zu eröffnen.

I. VERFAHREN

Mit Schreiben vom 28. Juni 2000 übermittelte die Republik Österreich eine förmliche Mitteilung gemäß Artikel 10 des EG-Vertrags, in welcher die Kommission über die finanziellen Schwierigkeiten der Bank Burgenland AG (BB) sowie die seitens des Bundeslandes Burgenland gesetzten Maßnahmen in Kenntnis gesetzt wurde. Im Anschluss daran fanden mehrere Gespräche mit den österreichischen Behörden im Hinblick auf die beihilferechtliche Klärung des vorliegenden Sachverhaltes statt.

Mit Schreiben vom 18. Juni 2002 sowie einer ergänzenden Mitteilung vom 3. Juli 2002 und 9. September 2002 notifizierten die österreichischen Behörden die seitens des Landes Burgenland gewährten Garantievereinbarungen und legten der Kommission einen Umstrukturierungsplan betreffend die Bank Burgenland AG vor.

II. HINTERGRUND

EB und HYPO-Bank Burgenland AG

Die BB ist eine Landes-Hypothekenbank (Regionalbank) mit Sitz in Eisenstadt, deren Geschäftstätigkeit überwiegend auf den Bereich des Bundeslandes Burgenland beschränkt ist. Hauptaktionär der BB ist das Land Burgenland mit einem Anteil von 97,897 % am Grundkapital. Die restlichen 2,103 % sind im Streubesitz. Die BB hatte eine Bilanzsumme von etwa 2,7 Milliarden EUR im Jahr 2000 und nahm damit den 33. Rang unter den österreichischen Banken ein.

Vor den beiden Garantievereinbarungen im Juni 2000 sowie im Dezember 2000 hielt das Land Burgenland 50,63 % Anteile am Grundkapital der BB. Andere wichtige Anteilseigentümer waren die Bank Austria mit 40,34 % sowie die Bausparkasse Wüstenrot mit 7 %. Die verbleibenden 2,03 % der Anteile waren im Streubesitz. Das Land Burgenland hat nach dem Erwerb der Aktien von der Bank Austria (Garantievereinbarung vom 23.10.2000 — siehe in weiterer Folge) mit der Bausparkasse Wüstenrot AG einen Optionsvertrag über den Erwerb sämtlicher Aktien der Bausparkasse Wüstenrot AG abgeschlossen. Dies sollte den ersten Schritt in Richtung Privatisierung der BB darstellen.

Als Landes-Hypothekenbank hat die BB die Aufgabe, den Geld- und Kreditverkehr im jeweiligen Bundesland zu fördern. Das Hauptgeschäft der BB besteht in der Gewährung hypothekarischer Darlehen und der Ausgabe von Hypothekendarlehen sowie Kommunalschuldverschreibungen. Daneben betreibt sie beinahe die gesamte Palette der sonstigen Bank- und Bankdienstleistungen. Der Marktanteil der BB an den Gesamteinlagen im Burgenland stellte sich im Jahr 2000 mit 30 %, jener an den Krediten mit 39 % dar.

Gemäß § 4 des Landes-Hypothekenbank Burgenland-Gesetzes, LGBl. Nr. 58/1991 i. d. F. des Gesetzes LGBl. Nr. 63/1998 haftet das Land Burgenland als Ausfallsbürge gemäß § 1356 ABGB im Falle der Zahlungsunfähigkeit der BB für sämtliche Verbindlichkeiten des Unternehmens. Es besteht eine Ausfallhaftung des Landes Burgenland für die BB bzw. deren Rechtsvorgänger in praktisch unveränderter Form bereits seit dem Jahr 1928. Die gesetzliche Regelung für die derzeit geltende Gewährträgerhaftung ist am 29. Juni 1991 in Kraft getreten und das Land Burgenland erhält seit dieser Gesetzesnovelle eine Haftungsprovision für die Bereitstellung der gesetzlichen Ausfallbürgschaft.

Die finanziellen Schwierigkeiten der BB

Im Zuge der Prüfung des Jahresabschlusses der BB für das Jahr 1999 wurde im Zusammenhang mit dem Kreditmanagement für die in Insolvenz geratene HOWE Bau AG ein Betrug mit einem Schaden in der Höhe von rund 189 Mio. EUR (2,6 Mrd. ATS) aufgedeckt, weil die Bestätigungsvermerke der von der HOWE Bau AG vorgelegten Jahresabschlüsse gefälscht worden waren. In diesem Zusammenhang stellte sich auch heraus, dass der verwertbare Wert der zur Besicherung der Kredite ausgestellten Grundschuldbriefe bei weitem nicht ausreichte, um die Kreditverbindlichkeiten abzudecken. Es ergab sich aus diesem Grund ein Wertberichtigungsbedarf in der Höhe von 170,8 Mio. EUR (2,35 Mrd. ATS), welcher das Kernkapital der Bank in der Höhe von 80 Mio. EUR überstiegen und somit unmittelbar zur Zahlungsunfähigkeit der BB geführt hätte. Ferner hätte die BB gemäß § 83 BWG die Anordnung der Geschäftsaufsicht beantragen müssen, welche eine insolvenzrechtliche Sonderregelung für Kreditinstitute darstellt und daher, nach Ansicht Österreichs, einem Konkurs der BB gleichzusetzen gewesen wäre. Dies hätte auch bedeutet, dass die Ausfallhaftung des Landes Burgenland zum Tragen gekommen wäre. Laut Gutachten der KPMG Austria Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H. vom 17.6.2000 hätte der im Falle der Zahlungsunfähigkeit der BB vom Land Burgenland zu deckende Betrag bei 247 Mio. EUR (3,4 Mrd. ATS) gelegen.

Um diese Folgen zu vermeiden, ist das Land Burgenland die Garantievereinbarung vom 20. Juni 2000 über einen Betrag von 170,8 Mio. EUR (2,35 Mrd. ATS) zuzüglich 5 % Zinsen eingegangen, um die uneinbringlichen Forderungen gegen die BB abzudecken.

Der Betrugsfall im Zusammenhang mit den HOWE-Krediten wurde zum Anlass genommen, eine umfassende Debitorenprüfung in Auftrag zu geben. Diese Debitorenprüfung sollte zeigen, ob die Systemmängel, welche im Rahmen des HOWE-Betrugsfalls aufgedeckt worden waren, auch Auswirkungen auf weitere Kreditengagements haben könnten. Der im Herbst 2000 durch diese Debitorenprüfung aufgedeckte Wertberichtigungsbedarf von rund 189 Mio. EUR (2,6 Mrd. ATS), wovon 29 Mio. EUR auf den HOWE-Komplex entfielen, brachte die Bank neuerlich in eine Situation, bei der die notwendigen Wertberichtigungen das Kernkapital der Bank überstiegen hätten und nur der Eingriff seitens des Landes die Eröffnung der Geschäftsaufsicht verhinderte. Um einen weiteren unmittelbar drohenden Schaden für das Land Burgenland als Aktionär und Ausfallsbürge zu vermeiden, schloss das Land Burgenland mit der Bank Austria AG und der BB eine Rahmenvereinbarung ab, wonach die Bank Austria AG auf Forderungen gegenüber der BB verzichtete.

III. EINGEHENDE BESCHREIBUNG DER BEIHILFEMASSNAHMEN

1) Garantievereinbarung vom 20. Juni 2000

Dabei handelt es sich um eine abstrakte Garantie über einen Betrag von 170,8 Mio. EUR (2,35 Mrd. ATS) zuzüglich 5 % Zinsen. Die positiven Geschäftsergebnisse der BB werden zur Deckung des Garantiebetrages eingesetzt. Nach den im Juni 2000 erstellten Planungen sollte sich der Garantiebtrag über eine Laufzeit von 10 Jahren auf Null reduzieren.

2) Die Rahmenvereinbarung vom 23. Oktober 2000 und die Zusatzvereinbarungen vom 1. Dezember 2000

Die Eckpunkte der Rahmenvereinbarung zwischen der Bank Austria und dem Land Burgenland vom 23. Oktober 2000 sowie die Durchführungsvereinbarungen vom 1. Dezember 2000 können wie folgt zusammengefasst werden: Da diese Vereinbarungen vor Abschluss der Debitorenprüfung eingegangen wurden, wurden die Beträge nachträglich dem Ergebnis der Debitorenprüfung angepasst.

a) Forderungsverzicht zwischen Bank Austria und BB

Die Bank Austria verzichtet auf Forderungen gegenüber der BB in der Höhe von 127,2 Mio. EUR (1,75 Milliarden ATS). Dieser Betrag wurde nach Abschluss der Debitorenprüfung auf 189 Mio. EUR (2,6 Milliarden ATS) angehoben.

b) Besserungsvereinbarung zwischen Bank Austria und BB

Der Besserungsschein für den Forderungsverzicht der Bank Austria sieht eine Rückführung des vollen Betrags der Forderungsverzichte der Bank Austria zuzüglich Zinsen (Mindestzinssatz Euribor-Basis mit Bundesaufschlag) in sieben gleichen Jahresraten, beginnend am 30. Juni 2004 bis zum 30. Juni 2010, vor. Die Erfüllung der Besserungsverpflichtung erfolgt aus Gewinnen der BB und ist vom jeweiligen Vorjahresergebnis abhängig.

c) Garantievereinbarung

Sowohl der Forderungsverzicht als auch der Besserungsschein wurden unter der Bedingung gegeben, dass das Land Burgenland die Ansprüche der Bank Austria gegenüber der BB mit einer Garantie besichert. Diese umfasst

— eine Ausfallgarantie für die Besserungsverpflichtung der BB gegenüber der Bank Austria;

— eine Garantie für Forderungen oder Eventualforderungen der Bank Austria aus Finanzierungsleistungen gleich welcher Art an die BB, soweit diese das in der Vereinbarung zum Forderungsverzicht festgelegte freie Finanzierungslimit der BB bei der Bank Austria überschreitet.

d) Aktienverkauf zwischen Bank Austria und Land Burgenland

Die Bank Austria verkauft ihre Aktien an der BB in der Höhe von 34,13 % um 0,07 EUR (1 ATS) an das Land Burgenland.

Diese Maßnahmen sind Teil eines allgemeinen Umstrukturierungsplans, demzufolge die Strategie für die künftige Geschäftstätigkeit der BB vor allem in der Einführung eines neuen Kreditrisikomanagements (organisatorische Umstrukturierung der Bank; Einstellung externer, qualifizierter Fachkräfte; Qualifizierung und Weiterbildung des bestehenden Personals; Einführung von neuen Kontrollen und Abläufen im Geschäftsbetrieb) und der Neuorganisation der Kundenbereiche besteht. Zusätzliche Maßnahmen wie die Reduzierung der Personal- und Sachkosten werden angestrebt.

Das Land Burgenland hat zudem die Absicht erklärt, die BB zu den bestmöglichen Bedingungen zu privatisieren. Es wurde eine Arbeitsgruppe eingesetzt, um die verschiedenen Privatisierungsvarianten zu sondieren und die für die Durchführung einer erfolgreichen Privatisierung notwendigen Maßnahmen vorzubereiten. Erste konkrete Schritte wurden eingeleitet, und das Land hat das erklärte Ziel, die Privatisierung bis spätestens Ende des Jahres 2004 zu beenden.

IV. BEURTEILUNG DER BEIHILFEMASSNAHMEN

Die Garantievereinbarungen des Landes Burgenland wurden bereits im Juni bzw. im Oktober des Jahres 2000 übernommen, sodass die Maßnahmen bereits zu diesem Zeitpunkt wirksam wurden. Da die Notifizierung erst im Juni 2002 erfolgte, hat Österreich seine Notifizierungsverpflichtung gemäß Artikel 88 Absatz 3 EG-Vertrag nicht erfüllt.

Beide Maßnahmen waren nach Ansicht der österreichischen Behörden notwendig, um die Anordnung der Geschäftsaufsicht gemäß § 83 BWG und in weiterer Folge den Konkurs der BB zu verhindern. Überdies sind beide Maßnahmen Teil eines Umstrukturierungsplans, den die Kommission in seiner Gesamtheit zu beurteilen hat.

Angesichts der obigen Ausführungen sind die staatlichen Maßnahmen als potentiell nicht notifizierte Beihilfen zusammen mit den rechtlichen Folgen des Artikels 13 Absatz 2 der Verordnung (EG) Nr. 659/1999 des Rates zu sehen.

Staatliche Beihilfen gemäß Artikel 87 Absatz 1 EG-Vertrag

Die beiden Garantievereinbarungen des Landes Burgenland zugunsten der BB beinhalten staatliche Mittel. Die Maßnahmen werden unter Bedingungen getroffen, die für einen marktwirtschaftlich handelnden Kapitalgeber nicht annehmbar wären.

Die österreichischen Behörden vertreten zwar die Ansicht, dass das Land Burgenland durch die abgeschlossenen Garantievereinbarungen einen höheren finanziellen Schaden insofern vermieden habe, als die Vereinbarungen sich auf das absolut notwendige Mindestmaß zur Verhinderung der Verhängung der Geschäftsaufsicht über die Bank beschränkt hätten. Hätte das Land Burgenland aufgrund der gesetzlichen verankerten Verpflichtung als Ausfallsbürge einstehen müssen, wäre im Hinblick auf die summenmäßig unbeschränkte Ausfallhaftung der Umfang der finanziellen Verpflichtungen aus den beiden Garantien überschritten worden. Die österreichischen Behörden stehen daher auf dem Rechtsstandpunkt, dass das Land Burgenland nach dem Prinzip eines marktwirtschaftlich handelnden Kapitalgebers gehandelt habe.

Diesem Vorbringen ist jedoch entgegenzuhalten, dass die Verhängung der Geschäftsaufsicht auf die Weiterführung des Bankunternehmens und die volle Befriedigung der Gläubiger abzielt. In dem Umstand, dass die Bank nicht in Konkurs gegangen ist, sondern weiter geführt werden konnte, ist ein Vorteil im Vergleich zur ursprünglichen Ausfallhaftung zu sehen. Während die ursprünglich gewährte Ausfallhaftung lediglich einen Gläubigerschutz darstellt, bewirkt die darüber hinausgehende eingegangene Verpflichtung des Landes Burgenland den Weiterbestand der Bank. Andernfalls wäre die Bank durch die Folge der Verhängung der Geschäftsaufsicht in Konkurs gegangen. Der Vorteil, der dem Unternehmen durch das vorzeitige Eingreifen des Landes zuteil geworden ist, ist insbesondere in der Möglichkeit der Fortführung des Unternehmens zu sehen und stellt die Begründung für das Vorliegen einer neuen Beihilfe dar.

Beide Maßnahmen wurden zugunsten eines sich in ernsten finanziellen Schwierigkeiten befindlichen Unternehmens getroffen. Zusammen genommen handelt es sich mit 359,8 Mio. EUR um einen erheblichen Betrag. Es war zum Zeitpunkt der Übernahme der Garantien für das Land offenbar nicht absehbar, dass es aus dieser Übernahme eine Rendite erwirtschaften könnte, die für einen marktwirtschaftlich handelnden Kapitalgeber annehmbar gewesen wäre.

Die betreffenden Beihilfen begünstigen die BB und bringen die BB gegenüber ihren Wettbewerbern künstlich in eine vorteilhafte Position, wodurch der Wettbewerb verfälscht wird. Die BB ist in ihren wichtigsten Sparten auf regionaler aber auch nationaler Ebene tätig (siehe weiter oben). Der Finanzdienstleistungssektor insgesamt ist durch eine zunehmende Integration gekennzeichnet, und in wesentlichen Teilbereichen ist der Binnenmarkt verwirklicht. Es herrscht starker Wettbewerb zwischen Finanzinstituten verschiedener Mitgliedstaaten, der sich mit der Einführung der einheitlichen Währung weiter verstärkt. Durch die Maßnahmen und ihre Auswirkungen auf gegenwärtige und potenzielle Wettbewerber aus anderen Mitgliedstaaten wird der Wettbewerb verfälscht — bzw. droht, verfälscht zu werden — und der Handel zwischen den Mitgliedstaaten beeinträchtigt. Infolgedessen stellen die Maßnahmen staatliche Beihilfen gemäß Artikel 87 Absatz 1 EG-Vertrag dar. Österreich hat diese Ansicht nicht infrage gestellt, sondern die betreffenden Maßnahmen angemeldet, wenn auch später als vorgeschrieben.

Vereinbarkeit gemäß Artikel 87 Absatz 2 EG-Vertrag

Artikel 87 des EG-Vertrags räumt Ausnahmen von dem Grundsatz der Unvereinbarkeit von staatlichen Beihilfen mit dem Gemeinsamen Markt ein. Jedoch ist keine der Ausnahmebestimmungen des Artikels 87 Absatz 2 EG-Vertrag in der vorliegenden Situation anwendbar. Die beiden Beihilfemaßnahmen haben keinen sozialen Charakter und werden nicht an einzelne Verbraucher gewährt und sollen auch nicht zur Beseitigung von Schäden, die durch Naturkatastrophen oder sonstige außergewöhnliche Ereignisse entstanden sind, dienen.

Vereinbarkeit gemäß Artikel 87 Absatz 3 Buchstaben a), b), d) und e) EG-Vertrag

Gleichfalls ist keine der Ausnahmebestimmungen des Artikels 87 Absatz 3 Buchstaben a), b), d) und e) EG-Vertrag anwendbar. Die Beihilfe dient nicht zur Förderung der wirtschaftlichen Entwicklung von Gebieten, in denen die Lebenshaltung außergewöhnlich niedrig ist oder eine erhebliche Unterbeschäftigung herrscht. Die Beihilfe dient auch nicht der Förderung wichtiger

Vorhaben von gemeinsamem europäischen Interesse oder der Behebung einer beträchtlichen Störung im Wirtschaftsleben eines Mitgliedstaats. Die Beihilfe dient nicht zur Förderung der Kultur und der Erhaltung des kulturellen Erbes. Sie stellt auch keine sonstige Art von Beihilfen dar, die der Rat durch eine Entscheidung mit qualifizierter Mehrheit auf Vorschlag der Kommission bestimmt hat.

Vereinbarkeit gemäß Artikel 87 Absatz 3 Buchstabe c) EG-Vertrag und den Rettungs- und Umstrukturierungsleitlinien von 1999

Damit bleiben die Ausnahmeregelungen von Artikel 87 Absatz 3 Buchstabe c) des EG-Vertrags. Die Beurteilung der Kommission von staatlichen Beihilfen zur Förderung der Entwicklung gewisser Wirtschaftszweige oder Wirtschaftsgebiete, soweit sie die Handelsbedingungen nicht in einer Weise verändern, die dem gemeinsamen Interesse zuwiderläuft, wird insbesondere durch Leitlinien geregelt. Die betreffenden Maßnahmen wurden als Teil eines Umstrukturierungsplans getroffen und sind deshalb gemäß den Leitlinien der Gemeinschaft für staatliche Beihilfen zur Rettung und Umstrukturierung von Unternehmen in Schwierigkeiten⁽¹⁾ („R&U-Leitlinien“) zu beurteilen.

Bezüglich der Umstrukturierung von Unternehmen legen die R&U-Leitlinien unter Ziffer 3.2.2 gewisse Voraussetzungen für die Genehmigung von Beihilfen fest; diese Voraussetzungen werden im Folgenden beschrieben.

Förderwürdigkeit des Unternehmens

Die Kommission stimmt mit der Erklärung Österreichs überein, derzufolge die BB als Unternehmen in Schwierigkeiten gemäß Absatz 30 in Kombination mit den Absätzen 4 bis 8 der R&U-Leitlinien eingestuft wird.

Es wird gemäß Absatz 4 der R&U-Leitlinien davon ausgegangen, dass sich ein Unternehmen in Schwierigkeiten befindet, „wenn es nicht in der Lage ist, mit eigenen finanziellen Mitteln oder Fremdmitteln, die ihm von seinen Eigentümern/Anteilseignern oder Gläubigern zur Verfügung gestellt werden, Verluste zu beenden, die das Unternehmen auf kurze oder mittlere Sicht so gut wie sicher in den wirtschaftlichen Untergang treiben werden, wenn der Staat nicht eingreift“. Diese Umstände liegen hinsichtlich der BB eindeutig vor.

Ohne das Eingreifen des Landes Burgenland wäre die BB unter Geschäftsaufsicht zu stellen gewesen und damit in den wirtschaftlichen Untergang im Sinne der Leitlinien getrieben worden.

Grundprinzip

Gemäß Absatz 28 der R&U-Leitlinien können Umstrukturierungsbeihilfen nur gewährt werden, wenn strenge Kriterien erfüllt sind und wenn die Gewissheit besteht, dass etwaige Wettbewerbsverfälschungen durch die mit der Weiterführung des Unternehmens verbundenen Vorteile aufgewogen werden, insbesondere wenn der Nettoeffekt der durch den Konkurs verursachten Entlassungen die lokalen, regionalen oder nationalen Beschäftigungsprobleme nachweislich verschärfen oder, in Ausnahmefällen, wenn das Verschwinden des Unternehmens zu einem Monopol bzw. einer engen Oligopol-situation führen würde.

⁽¹⁾ ABl. C 288 vom 9.10.1999.

Letzteres kann allerdings ausgeschlossen werden, da die Position der BB nicht stark genug ist, um durch ihren Konkurs bzw. den darauf folgenden teilweisen Verkauf eine Monopol- oder Oligopol-situation zu schaffen.

Österreich bringt zwar vor, dass neben der BB fast ausschließlich die Raiffeisen-Gruppe als bedeutende Bank im Land Burgenland tätig sei und somit das Verschwinden der BB zu einer weiteren Konzentration der Marktstruktur und zu einer weiteren Stärkung der Raiffeisen-Gruppe führen würde, doch scheint dieses Argument im Hinblick darauf, dass im Land Burgenland auch andere Banken, Sparkassen und Volksbanken vertreten sind, auf der Basis der derzeit verfügbaren Informationen nicht haltbar.

Im Übrigen wurden bisher keine Ausführungen zu den wirtschaftlichen und sozialen Auswirkungen (z. B. im Hinblick auf die Beschäftigung) einer Geschäftsaufgabe/eines Konkurses der BB bzw. einer Umstrukturierung der BB für die Region dargelegt. Österreich schätzt jedoch für den Fall einer Liquidation oder einer Reduzierung der Anzahl der Filialen der BB die Wahrscheinlichkeit, dass sich eine ausländische Bank im Land Burgenland niederlasse und die Aktivitäten der BB übernehme, im Hinblick auf die wirtschaftliche Lage und die relativ geringe Attraktivität des Landes Burgenland als äußerst niedrig ein.

Wiederherstellung der langfristigen Rentabilität

Gemäß den Absätzen 31 bis 34 der R&U-Leitlinien muss die Kommission für alle Einzelbeihilfen einen Umstrukturierungsplan billigen, nachdem sie ihn daraufhin beurteilt hat, ob er in der Lage ist, die langfristige Rentabilität des Unternehmens wieder herzustellen.

Der von Österreich vorgelegte Umstrukturierungsplan sei, laut Aussage der österreichischen Behörden, auf die Behebung jener Umstände ausgerichtet, die ursprünglich zu den Schwierigkeiten der Bank geführt hätten. Er sehe daher als wichtigste Strategie für die Zukunft die Einführung eines neuen Kreditrisikomanagements mit einer umfangreichen organisatorischen Umstrukturierung der Bank und die Neuorganisation der Kundebereiche (Firmenkunden- und Privatkundenbereich) vor.

Durch die Maßnahmen in Bezug auf das Kreditrisikomanagement solle das Kreditportefeuille der BB aufgewertet werden. Es erfolge eine Aufteilung dieses Portefeuilles in „gute“ und „schlechte“ (HOWE-Komplex und andere Kredite, die als risikobehaftet befunden und zinslos gestellt wurden) Geschäfte.

Für die Darstellung der Entwicklung der langfristigen Rentabilität seien die bei der Umstrukturierung gewonnenen Erkenntnisse nun mitzuberücksichtigen. Nach vollständiger Abschließung der Debitorenprüfung seien nun die zuvor global erfolgten Wertberichtigungen den verschiedenen Krediten zugeordnet worden. Gleichzeitig sei auch ein Teil des Kreditgeschäfts zinslos gestellt worden. Dies habe nach Angaben der österreichischen Behörden einen durchschnittlichen Zinssatz in der Höhe von 4,7 % auf das gesamte Kreditportefeuille ergeben. Da zu diesem Zeitpunkt der globalen Wertberichtigung noch keine konkreten Zinslos-Stellungen haben erfolgen können, haben im Jahre 2002 nachträglich die Zinsergebnisse der Vorjahre gekürzt werden müssen. Zusätzlich zu diesen nachträglichen Ergebnisminderungen seien höhere Refinanzierungskosten zu berücksichtigen gewesen, als anfangs in den Planungen vorgesehen. Die neuen bereinigten Ergebnisse haben somit ein negatives Return on Equity für die Jahre 2001—2003 ergeben.

Nach Ansicht der österreichischen Behörden sei jedoch langfristig mit einer Rentabilität in der Höhe von 15 % bis zum Jahre 2010 zu rechnen.

Zudem bestehe die Absicht, die Personal- und Sachkosten zu reduzieren, die Effizienz und Qualität im Allgemeinen zu steigern, die Modernisierung und Rationalisierung voran zu treiben sowie Grundsätze in Richtung einer Ergebnisorientierung zu entwickeln. Die österreichischen Behörden haben jedoch darauf hingewiesen, dass die Möglichkeit und die Notwendigkeit der Bank, Personal abzubauen, insofern beschränkt sei, als die Bank vor Auftreten der Schwierigkeiten keinen überdimensionierten Personalstand oder überhöhte Sachaufwendungen aufgewiesen habe.

Darüber hinaus bestehe seitens des Landes Burgenland die Absicht, die BB zu privatisieren. Es sei bereits eine Arbeitsgruppe zur Sondierung verschiedener Privatisierungsvarianten sowie zur Vorbereitung einer erfolgreichen Privatisierung eingesetzt worden. Darüber hinaus habe das Land Burgenland im August 2002 die zuvor von der Bausparkasse Wüstenrot gehaltenen Aktien erstanden, was als erster Schritt in Richtung der geplanten Privatisierung zu sehen sei. Als nächster Schritt seien die Bewertung der Bank und die Evaluierung der Verkaufsmöglichkeiten durch eine Investmentbank und im ersten Halbjahr 2003 die Veröffentlichung des Privatisierungsvorhabens und der Beginn des Verkaufsprozesses erfolgt. Der Abschluss des Privatisierungsprozesses sei im Laufe des Jahres 2004 geplant.

Laut Ausführungen der österreichischen Behörden hängt von den Maßnahmen betreffend die Personal- und Sachkosten, die Effizienz und Qualität, die Modernisierung und Rationalisierung und jene in Richtung Ergebnisorientiertheit zwar nicht unmittelbar die Tragfähigkeit des Umstrukturierungskonzeptes oder die Herstellung der langfristigen Rentabilität der Bank ab, sie mögen es der BB jedoch erlauben, sich schneller zu stabilisieren, und sollen die Privatisierungsabsichten der Bank erhöhen und den Vorgang beschleunigen.

Die Kommission hat zum gegenwärtigen Zeitpunkt Zweifel, dass die Annahmen bezüglich des Marktes und die Vorhersagen hinsichtlich der angestrebten Rentabilität ausreichend präzise sind, um Schlussfolgerungen in Bezug auf die Erfolgsaussichten der vorgeschlagenen Umstrukturierungsmaßnahmen ziehen zu können. Es ist schwer zu erkennen, auf welchen Marktannahmen die Umstrukturierungsmaßnahmen beruhen. Es werden keinerlei Grundlagen für die Prognose der langfristigen Rentabilität in der Höhe von 15 % bis zum Jahre 2010 dargelegt. Darüber hinaus bezweifelt die Kommission, dass die angestrebte Rendite von 15 % realistisch ist und daher tatsächlich bis zum Jahre 2010 erreicht werden kann. Die Kommission fordert Österreich daher auf, detaillierte Prognosedaten und die ihnen zugrunde liegenden Annahmen vorzulegen, insbesondere für die zwei Märkte Firmenkundenbereich und Privatkundenbereich, in denen die BB weiterhin in signifikantem Maße tätig sein wird.

Die Kommission ersucht die österreichischen Behörden auch um detailliertere Informationen (z. B. Vergleichswerte im Bankensektor) zur Aussage Österreichs, dass die BB vor Auftreten der Schwierigkeiten keinen überdimensionierten Personalstand oder überhöhte Sachaufwendungen aufwies, weswegen die Möglichkeit und die Notwendigkeit der Bank, Personal abzubauen, begrenzt sei.

Zudem ist festzustellen, dass die von Österreich im Hinblick auf die Schwierigkeiten des Unternehmens gegebenen Informationen hauptsächlich eine Zusammenfassung der finanziellen Schwierigkeiten darstellen. Es wird nur ein einziger wirklicher Grund für diese Schwierigkeiten angegeben, nämlich ein mangelhaft funktionierendes Kreditrisikomanagement. Eine eingehende Analyse der Unternehmens- und Managementstrukturen sowie der konkreten Versäumnisse des Managements, welche für die Beurteilung der Aussichten für die Umstrukturierung der BB unverzichtbar ist, fehlt. Diesbezüglich wird lediglich auf die einzelnen Maßnahmen im Zusammenhang mit der Einführung eines neuen Kreditrisikomanagements eingegangen. Die Kommission hat daher Zweifel daran, dass im Umstrukturierungsplan die Ursachen der Schwierigkeiten der BB in hinreichender Weise erkannt und behandelt werden. Österreich wird daher gebeten, eine eingehende Analyse vergangener Versäumnisse und künftiger Aussichten und Probleme im Kontext von Unternehmensstrukturen, Management- und Aufsichtsmethoden, Kontroll- und Berichterstattungskonzepten sowie Techniken für die Einführung von kommerziell fundierten Entscheidungsprozessen vorzulegen.

Im Hinblick auf eine mögliche Privatisierung hat Österreich die Absicht und erste Schritte sowie den geplanten Abschluss des Privatisierungsprozesses erwähnt. Es wurden jedoch keinerlei Details, etwa über das beabsichtigte Verfahren, Konditionen und andere relevante Faktoren angegeben. Die Kommission ersucht daher Österreich um weitere Informationen, insbesondere darüber, in welchem Stadium ein potenzielles Privatisierungsverfahren sich derzeit befindet, ob die mögliche Privatisierung im Rahmen eines transparenten, diskriminierungsfreien Verfahrens umgesetzt wird und wie der weitere Zeitplan aussieht.

Vermeidung unzumutbarer Wettbewerbsverfälschungen

Die Ausnahmeregelung von Artikel 87 Absatz 3 Buchstabe c) des EG-Vertrags unterliegt der Bedingung, dass die Beihilfen die Handelsbedingungen nicht in einer Weise verändern, die dem gemeinsamen Interesse zuwiderläuft. Die Absätze 35 bis 39 der R&U-Leitlinien legen fest, dass Maßnahmen getroffen werden müssen, um nachteilige Auswirkungen der Beihilfe auf Konkurrenten nach Möglichkeit abzumildern. Üblicherweise konkretisiert sich diese Bedingung durch eine Begrenzung oder Reduzierung der Präsenz des Unternehmens auf den relevanten Produktmärkten, durch eine Veräußerung von Produktionsanlagen oder Tochtergesellschaften oder durch einen Abbau von Tätigkeiten. Die Begrenzung oder Reduzierung muss im Verhältnis zu den durch die Beihilfe verursachten Verzerrungseffekten und insbesondere zu dem relativen Gewicht des Unternehmens auf seinem Markt oder seinen Märkten stehen.

Österreich führt aus, dass die BB im Vergleich zu den bisher von der Kommission untersuchten Umstrukturierungsfällen eine verhältnismäßig kleine Bank sei, die vor allem rein regional tätig sei und zwar in einer Region, die seit 1995 durchgehend als Ziel-1-Fördergebiet eingestuft sei. Die Erkenntnisse, die die Kommission bei den Untersuchungen bezüglich der anderen Banken in Schwierigkeiten gewonnen habe, seien daher nicht ohne weiteres auf die Situation der BB übertragbar. So sei es beispielsweise im Hinblick auf die Größe und die Marktpräsenz der BB, die sich rein auf die Abdeckung aller wesentlichen Geschäftsfelder einer regional tätigen Universalbank konzentriere, nicht möglich, ganze Geschäftsfelder abzugeben. Auch eine Reduzierung einer Vielzahl von Geschäftsstellen und der Bilanzsumme auf ein Drittel (wie beispielsweise

im Fall der Banco di Napoli, Banco di Sicilia und Crédit Lyonnais) sei auf die BB nicht anwendbar, da dies die Lebensfähigkeit der Bank bedrohen und zum Scheitern der Umstrukturierung führen würde.

Die diesbezüglich seitens der BB zu treffenden oder bereits getroffenen Hauptmaßnahmen können wie folgt zusammengefasst werden:

- Veräußerung von Beteiligungen: während Ende des Jahres 1999 die Summe der Beteiligungen der BB bei rund 13,3 Mio. EUR lag, sank diese bis Mitte des Jahres 2002 um rund 7,8 Mio. EUR (d. h. um 41,4 %);
- Reduzierungsmaßnahme: Schließung einer Filiale Anfang des Jahres 2003 (von insgesamt 17 Filialen);
- Aufgabe von Tätigkeiten: BB wird künftig keine Bundesdarlehen mehr vergeben. Diese Kredite entsprechen nach den Angaben Österreichs einem Wert von etwa 120 Mio. EUR. Damit verliere die BB ein wesentliches Instrumentarium zur Erhöhung ihres Kreditvolumens und schränke ihre Handlungsfähigkeit erheblich ein.

Aufgrund der teilweise vagen Beschreibung der Kompensationsmaßnahmen und ihres jeweiligen Beitrags zu den angestrebten Auswirkungen auf das Vermögen und die Beschäftigungssituation der BB ist es in diesem Stadium nicht möglich, den Gesamteffekt der Maßnahmen zu beurteilen. Es liegt auch keine betragsmäßige Bezifferung des Wertes dieser Maßnahmen bzw. des Reduzierungseffektes, z. B. gemessen an der Bilanzsumme, vor. Überdies gibt es keine konkreten Informationen über den Effekt der Kompensationsmaßnahmen auf die künftige wettbewerbliche Position der BB. Die Kommission benötigt daher detaillierte Informationen hinsichtlich des Effekts jeder Maßnahme auf das Vermögen, die Beschäftigungssituation und die künftigen Markt-/Segmentpositionen der BB sowie eine ausdrückliche Bezifferung der Reduzierungen.

Aufgrund der Tatsache, dass das Burgenland eine Region ist, die seit dem Jahr 1995 durchgehend als Ziel-1-Fördergebiet eingestuft wurde und daher eine Region im Sinne von Artikel 87 Absatz 3 Buchstabe c) ist und für Regionalbeihilfen in Betracht kommt, hat Österreich auf die Absätze 53 und 54 der R&U-Leitlinien und ihre Berücksichtigung bei der Beurteilung der Gegenleistung verwiesen, ohne dies jedoch weiter auszuführen bzw. konkrete Aspekte geltend zu machen. Die Absätze 53 und 54 besagen, dass die Beurteilungskriterien der R&U-Leitlinien auch für regionale Fördergebiete gelten, dass aber die Maßstäbe an den auf Märkten mit strukturellen Überkapazitäten verlangten Kapazitätsabbau weniger streng sein können. Da Österreich diesen Punkt jedoch nicht weiter konkretisiert hat, ist die Kommission zu diesem Zeitpunkt nicht in der Lage, die Anwendbarkeit dieses Kriteriums festzustellen.

Zusammenfassend ist festzustellen, dass der Kommission Informationen für die angemessene und hinreichende Beurteilung der vorgeschlagenen Kompensationsmaßnahmen fehlen, und sie deshalb auf der Grundlage der verfügbaren Tatsachen Zweifel daran hat, dass die geplanten Reduzierungsmaßnahmen die wettbewerbsverfälschenden Auswirkungen der Beihilfen ausreichend mindern.

Auf das Mindestmaß begrenzte Beihilfe

Gemäß den Absätzen 40 und 41 der R&U-Leitlinien muss sich die Beihilfe auf das für die Umstrukturierung unbedingt notwendige Mindestmaß beschränken, sodass dem Unternehmen keine überschüssige Liquidität zugeführt wird, die es zu einem aggressiven und marktverzerrenden Verhalten oder sogar für eine Expansion verwenden könnte. Die R&U-Leitlinien besagen ebenfalls, dass von dem Beihilfeempfänger erwartet wird, aus eigenen Mitteln, auch durch den Verkauf von Vermögenswerten, wenn diese für den Fortbestand des Unternehmens nicht unerlässlich sind, einen bedeutenden Beitrag zu dem Umstrukturierungsplan zu leisten.

Österreich bringt vor, dass es sich bei den staatlichen Maßnahmen zur Umstrukturierung der BB nicht um eine Zufuhr liquider Mittel gehandelt habe, sondern dass das Land Burgenland einzig durch die Gewährung von Garantien eingegriffen habe. Zudem sei in den Garantie- und Besserungsvereinbarungen vorgesehen, dass die Bank sämtliche Erträge zur Minderung der Garantiesummen einzusetzen habe. Somit sei ein Mechanismus eingerichtet worden, der sicherstelle, dass die Bank den für sie höchstmöglichen finanziellen Eigenbeitrag zu der Umstrukturierung leiste und den Beitrag des Landes dadurch verringere. Darüber hinaus habe das Land Burgenland, um die Leistung der höchstmöglichen Rückzahlungen durch die Bank zu gewährleisten, eine Reihe von Aufsichts- und Kontrollmechanismen neu eingeführt bzw. verschärft und eine strenge monatliche bzw. quartalsmäßige Berichterstattungspflicht eingeführt.

Als Eigenbeitrag der BB bringt Österreich vor, dass die stillen Reserven gänzlich abgebaut würden. Wie auch aus dem Jahresabschluss für das Jahr 2001 hervorgehe, verfüge die BB nahezu über keine stillen Reserven mehr. Zudem seien bereits Maßnahmen zur Minderung der Personalkosten beschlossen und eingeführt worden. Einerseits sollen Personalabgänge nicht mehr ersetzt werden, andererseits seien die Pensionszusagen neu geregelt und dabei gekürzt worden, was zu jährlichen Einsparungen in der Höhe von 0,4 Mio. EUR führen werde. Im Jahr 2003 solle durch eine konsequente Maximierung des Einsparungspotentials in allen Bereichen (Personal inbegriffen) eine zusätzliche Reduzierung der Betriebskosten (Personal- und Sachaufwand) um 5 % erreicht werden.

Auf der Grundlage der verfügbaren Informationen ist die Kommission nicht in der Lage, genau zu beurteilen, ob die Beihilfe das unbedingt notwendige Mindestmaß ist, da die Garantien in

der Praxis eine ähnliche Wirkung wie eine Kapitalzuführung haben. Darüber hinaus weist Österreich im Kapitel zur beabsichtigten Privatisierung darauf hin, dass eine Privatisierung aus der Sicht des Landes Burgenland die einzige Möglichkeit wäre, die drohende Belastung des Landes aus den beiden Garantievereinbarungen zu minimieren. Dieser Hinweis könnte vermuten lassen, dass die Bank möglicherweise nicht in der Lage sein könnte, den von ihr geforderten hohen finanziellen Eigenbeitrag zur Entlastung des Landes Burgenland zu leisten.

V. SCHLUSSFOLGERUNG

Angesichts der fehlenden Informationen im Zusammenhang mit der Wiederherstellung der langfristigen Rentabilität, der Kompensationsmaßnahmen und der offenen Fragen in Bezug auf die Begrenzung der Maßnahmen auf das erforderliche Mindestmaß hat die Kommission zum gegenwärtigen Zeitpunkt und auf Basis der derzeit verfügbaren Informationen Zweifel hinsichtlich der Vereinbarkeit der Beihilfe mit dem Gemeinsamen Markt. Im Licht der vorstehenden Überlegungen fordert die Kommission Österreich im Rahmen des Verfahrens gemäß Artikel 88 Absatz 2 des EG-Vertrags auf, innerhalb eines Monats nach Eingang dieses Schreibens eine Stellungnahme abzugeben und alle Informationen zu erteilen, die eine Hilfe bei der Beurteilung der Beihilfemaßnahmen sein können, insbesondere die weiter oben erwähnten bisher fehlenden Informationen. Sie fordert Ihre Behörden auf, unverzüglich eine Kopie dieses Schreibens an den Beihilfeempfänger weiterzuleiten.

Die Kommission erinnert Österreich an die aufschiebende Wirkung von Artikel 88 Absatz 3 EG-Vertrag und verweist auf Artikel 14 der Verordnung (EG) Nr. 659/1999 des Rates, demzufolge jede unrechtmäßig gewährte Beihilfe vom Empfänger zurückgefordert werden kann.

Die Kommission weist Österreich darauf hin, dass sie die Beteiligten durch die Veröffentlichung dieses Schreibens und einer Zusammenfassung im *Amtsblatt der Europäischen Union* informieren wird. Sie wird ferner Beteiligte in den EFTA-Staaten, die das EWR-Abkommen unterzeichnet haben, durch Veröffentlichung einer Bekanntmachung im EWR-Supplement des *Amtsblatts der Europäischen Union* informieren und wird die EFTA-Überwachungsbehörde durch Übermittlung einer Kopie dieses Schreibens informieren. Alle Beteiligten werden aufgefordert, sich innerhalb eines Monats nach dem Datum dieser Veröffentlichung zu äußern.»

AYUDAS ESTATALES — FRANCIA

Invitación a presentar observaciones, en aplicación del apartado 2 del artículo 88 del Tratado CE, sobre la ayuda C 46/03 (ex NN 39/03) — Francia — Cotizaciones en favor de Interbev

(2003/C 189/05)

Por carta de 9 de julio de 2003, reproducida en la versión lingüística auténtica en las páginas siguientes al presente resumen, la Comisión notificó a Francia su decisión de incoar el procedimiento previsto en el apartado 2 del artículo 88 del Tratado CE en relación con esta ayuda.

La Comisión invita a los interesados a presentarle sus observaciones respecto de esta ayuda en el plazo de un mes a partir de la presente publicación, enviándolas a la siguiente dirección:

Comisión Europea
Dirección General de Agricultura
Dirección Legislaciones Económicas Agrarias
L 130 5/128
B-1049 Bruxelles/Brussel
Fax (32-2) 296 76 72.

Estas observaciones se comunicarán a Francia. El interesado que presente observaciones podrá solicitar por escrito, exponiendo los motivos de su solicitud, que su identidad sea tratada confidencialmente.

RESUMEN

A raíz de las informaciones recibidas, la Comisión interrogó a las autoridades francesas sobre algunas medidas mediante carta de 2 de octubre de 2001. La Representación Permanente de Francia ante la Unión Europea respondió a la Comisión mediante carta de 9 de noviembre de 2001. El régimen no se notificó a la Comisión con arreglo al apartado 3 del artículo 88 del Tratado. Así pues, parece tratarse de una ayuda nueva aplicada en infracción del apartado 3 del artículo 88 del Tratado y, por lo tanto, una ayuda ilegal a efectos del Tratado.

La Comisión ha decidido incoar el procedimiento de examen previsto en el apartado 3 del artículo 88 del Tratado en relación con las mencionadas ayudas porque parecen conceder a los productores de carne de bovino y ovino ayudas estatales que podrían ser incompatibles con el artículo 87 del Tratado.

Interbev: las cotizaciones

La Association Nationale Interprofessionnelle du Bétail et des Viandes (Interbev) es la organización interprofesional francesa para el sector ganadero y cárnico. Sus dos misiones principales son el establecimiento de acuerdos interprofesionales y la comunicación colectiva. A esto se añaden los programas de investigación en el sector cárnico. Los acuerdos interprofesionales firmados en el seno de la asociación definen las reglas que rigen la actividad del sector. Estos acuerdos pueden presentarse a los poderes públicos en el marco del procedimiento de extensión. Una vez promulgada la extensión mediante decreto conjunto de los Ministerios de Agricultura y de Economía, las medidas previstas por un acuerdo interprofesional revisten carácter obligatorio para todos los operadores del sector.

Son objeto del presente examen dos tipos de cotizaciones interprofesionales que las autoridades públicas han hecho obligatorias: por un lado, la cotización sobre las carnes y los despojos de las especies bovina y ovina destinados al consumo humano y sobre los animales vivos de las especies bovina y ovina expedidos hacia los países de la Unión Europea o exportados («la cotización sobre las carnes»), y, por otro lado, la cotización en beneficio del Fonds National de l'Élevage («la cotización FNE»).

1. La cotización sobre las carnes

Mediante Acuerdo interprofesional de 25 de julio de 1995, que fue objeto de extensión mediante Decreto de 18 de diciembre de 1995, Interbev instauró una cotización sobre las carnes y los despojos destinados al consumo humano de las especies bovina y ovina, así como sobre los animales vivos de las especies bovina y ovina expedidos hacia los países de la Unión Europea o exportados. La cotización afectaba a tres categorías de carnes y/o animales: la carne y los despojos destinados al consumo humano de los animales sacrificados en Francia, las carnes introducidas o importadas para ser consumidas en Francia, y los animales vivos de las especies bovina y ovina expedidos hacia un país de la Unión Europea o exportados.

El Acuerdo interprofesional de 25 de julio de 1995 se sustituyó por otro Acuerdo interprofesional de 12 de junio de 2001, que fue objeto de extensión en último lugar mediante Decreto de 19 de septiembre de 2001. El Acuerdo se extendió hasta el 19 de septiembre de 2004. Con respecto a la extensión de 1995, el acuerdo en vigor excluye de la parte dispositiva las disposiciones de la categoría 2 relativas a la cotización sobre las carnes introducidas o importadas para ser consumidas en Francia. Así pues, estos productos ya no están sometidos a la cotización sobre las carnes desde el 4 de mayo de 2001.

2. La cotización FNE

Mediante Acuerdo interprofesional de 15 de junio de 1994, que fue objeto de extensión mediante Decreto de 18 de diciembre de 1995 y, en último lugar, mediante Decreto de 19 de septiembre de 2001, Interbev instituyó una cotización a favor de un fondo de ganadería. Este fondo profesional se creó para responder a dos objetivos principales: por un lado, incitar la reestructuración de las organizaciones de servicio y favorecer su adaptación a las necesidades futuras de ganaderos cada vez menos numerosos y confrontados a las políticas comunitarias de gestión de las producciones; y, por otro lado, contribuir a la continuidad de los medios colectivos dedicados al progreso genético y a la investigación aplicada, factores clave para la competitividad futura de la ganadería.

A fin de alimentar este fondo, se ha instituido una cotización adicional, enteramente sufragada por los ganaderos, deducida en las mismas condiciones que la cotización sobre las carnes. Los ingresos de esta cotización se utilizan para la mejora genética, el sistema de información genética, la biotecnología y estudios económicos.

Las medidas financiadas

Los recursos de Interbev se utilizan en tres tipos de medidas: comunicación y promoción en beneficio del sector, asistencia técnica, e investigación y experimentación.

En lo que respecta a la comunicación y a la promoción, se trata en particular de la financiación de campañas sobre temas diversos relacionados con los productos cárnicos de calidad, que incluye campañas más genéricas en la televisión y en la radio para la carne de buey, así como acciones de relaciones públicas. Se financian también medidas de promoción en los mercados exteriores como, por ejemplo, la participación en salones profesionales y de promoción. En 2000, el importe total de estas medidas ascendió a 121,7 millones de francos franceses.

Las medidas de asistencia técnica están relacionadas, en particular, con la certificación y cualificación de las ganaderías, en particular para satisfacer las exigencias impuestas a los operadores. Interbev también elabora pliegos de condiciones colectivos para el sector y participa en la difusión y aplicación de la carta de buenas prácticas de ganadería y del código de buenas prácticas para el trabajo de la carne, además de participar en la clarificación de las transacciones en la profesión. En 2000, el importe total de estas medidas ascendió a 20 millones de francos franceses.

Las medidas de investigación y experimentación son las más adaptadas a las necesidades del sector, al interesarse particularmente en la seguridad alimentaria, la gestión de la calidad y el bienestar de los animales. En 2000, el importe total de estas medidas ascendió a 4 millones de francos franceses.

Apreciación de estas medidas por parte de la Comisión

La Comisión toma nota de que, en cuanto respecta primeramente a la naturaleza de estas cotizaciones, el Gobierno francés impuso su carácter obligatorio en el marco de un procedimiento de extensión de los acuerdos interprofesionales. La extensión de los acuerdos se hace mediante la adopción de un decreto publicado en el *Journal officiel de la République française*.

De esto se desprende que las cotizaciones han requerido un acto de autoridad pública para producir todos sus efectos. Por ello, la Comisión considera en la presente fase que en este caso se trata de tasas parafiscales, es decir, de recursos públicos.

Conforme al punto 23.3 de las Directrices comunitarias sobre ayudas estatales al sector agrario ⁽¹⁾, las ayudas ilegales deben evaluarse con arreglo a las normas y directrices vigentes en el momento de su concesión. Las Directrices agrarias se aplican desde el 1 de enero de 2000. Por consiguiente, toda ayuda concedida después de esta fecha deberá juzgarse a la luz de estas Directrices. En cambio, toda ayuda concedida antes de esta fecha deberá juzgarse a la luz de las disposiciones y de la práctica aplicable antes del 1 de enero de 2000. Las presentes ayudas empezaron a concederse en 1996 y siguen concediéndose en la actualidad. Al tratarse de ayudas estatales financiadas mediante una tasa parafiscal, las acciones financiadas por las ayudas y la financiación de las propias ayudas deberán ser objeto de examen por la Comisión.

1. Las ayudas

1.1. Las medidas de promoción

La compatibilidad de las ayudas concedidas antes del 1 de enero de 2002 debe analizarse a la luz del encuadramiento de las ayudas nacionales para publicidad de productos agrarios y de determinados productos no incluidos en el anexo II del Tratado CEE ⁽²⁾ y, para las ayudas concedidas después de esa fecha, a la luz de las Directrices sobre ayudas estatales para publicidad de productos incluidos en el anexo I del Tratado CE y de determinados productos no incluidos en el mismo ⁽³⁾. Ambos textos comparten básicamente los mismos principios al establecer criterios negativos y positivos que deben respetarse. En lo que respecta a la limitación de las ayudas, estas medidas deben recibir una financiación del sector del 50 % de los costes como mínimo. En el caso presente, las medidas se financian por entero con tasas parafiscales y los esfuerzos financieros de los profesionales alcanzan este nivel por definición. La Comisión considera, pues, que se han respetado las condiciones aplicables.

1.2. Las medidas de asistencia técnica

La compatibilidad de las ayudas concedidas antes del 1 de enero de 2000 debe analizarse a la luz de la práctica de la Comisión inspirada por la propuesta de medidas útiles en relación con las ayudas concedidas por los Estados miembros en el sector de la ganadería y de los productos ganaderos ⁽⁴⁾ y, para las ayudas concedidas después de esta fecha, a la luz de las Directrices agrícolas. La práctica de la Comisión aplicable antes de 2000 y las Directrices agrarias comparten, en esencia, los mismos principios. Así, se autoriza para este tipo de ayudas la financiación del 100 % de los gastos admisibles. Además, las

⁽¹⁾ DO C 28 de 1.2.2000 y corrección de errores en el DO C 232 de 12.8.2000.

⁽²⁾ DO C 302 de 12.11.1987.

⁽³⁾ DO C 252 de 12.9.2001.

⁽⁴⁾ Carta de la Comisión a los Estados miembros n° S/75/29416 de 19 de septiembre de 1975.

ayudas deben ser accesibles a todos los profesionales potencialmente interesados. La Comisión considera, por consiguiente, que se han respetado las condiciones aplicables.

1.3. Las medidas de investigación y experimentación

La compatibilidad de estas ayudas debe comprobarse a la luz del encuadramiento comunitario sobre ayudas de Estado de investigación y desarrollo ⁽⁵⁾ y de la Comunicación de la Comisión por la que se modifica dicho Encuadramiento ⁽⁶⁾. Así, es compatible con el mercado común un porcentaje de ayuda de hasta un 100 % en caso de cumplirse las cuatro condiciones siguientes: la ayuda debe revestir un interés general para el sector; la información debe comunicarse a través de las publicaciones apropiadas; los resultados de los trabajos deben facilitarse siguiendo un criterio de equidad tanto en costes como en tiempo; la ayuda debe satisfacer los criterios comerciales internacionales suscritos por la Unión Europea. La Comisión considera, por consiguiente, que se han respetado las condiciones aplicables.

1.4. Las medidas financiadas por la cotización FNE

La Comisión se pregunta cuál es la naturaleza exacta de las medidas financiadas por la cotización FNE, que tiene la finalidad de incitar la reestructuración de las organizaciones de servicio y favorecer su adaptación a las necesidades futuras de los ganaderos, además de contribuir a la continuidad de los medios colectivos dedicados al progreso genético y a la investigación aplicada. Según las autoridades francesas, los ingresos de esta cotización se utilizan para la mejora genética, el sistema de información genética, la biotecnología y los estudios económicos. Estos elementos de información son insuficientes para permitirle a la Comisión comprobar la compatibilidad de estas medidas con las disposiciones comunitarias posiblemente aplicables. Así pues, en la fase presente, la Comisión no está en condiciones de concluir si las medidas financiadas por la cotización FNE son compatibles con el Tratado CE.

2. **La financiación de las ayudas**

2.1. La cotización sobre las carnes

Entre el 1 de enero de 1996 y el 4 de mayo de 2001, la citada cotización se aplicaba, entre otras cosas, a la carne introducida o importada para su consumo en Francia. Conforme a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas ⁽⁷⁾, la Comisión considera normalmente que la financiación de una ayuda mediante cargas obligatorias puede tener una incidencia sobre la ayuda por tener un efecto protector que va más allá de la ayuda propiamente dicha. Las cotizaciones en cuestión constituyen efectivamente cargas obligatorias. Según esta misma jurisprudencia, la Comisión considera que una ayuda a los productores nacionales no puede financiarse mediante tasas parafiscales que graven igualmente a las importaciones de los productores del mismo producto de otros Estados miembros.

⁽⁵⁾ DO C 45 de 17.2.1996.

⁽⁶⁾ DO C 48 de 13.2.1998.

⁽⁷⁾ Sentencia de 26 de junio de 1970 en el asunto 47/69 (Rec. 1970, p. XVI-487).

Teniendo en cuenta la citada jurisprudencia y el hecho de que las medidas financiadas por la tasa parecen constituir una ayuda estatal con arreglo al artículo 87 del Tratado; que la tasa reviste carácter discriminatorio en infracción del artículo 90 del Tratado puesto que se impone también a los productos procedentes de otros Estados miembros sin por ello permitirles beneficiarse de las ventajas de ella derivadas, en la presente fase la Comisión considera que el fruto de la tasa obtenido mediante el gravamen sobre los productos importados de otros Estados miembros para financiar medidas de promoción, asistencia técnica e investigación y experimentación llevadas a cabo por Interbev podrían constituir una financiación incompatible con las normas de competencia y, por consiguiente, que las ayudas estatales así financiadas podrían ser incompatibles con el Tratado en idéntica medida.

Desde el 1 de enero de 1996, la cotización afecta, entre otras cosas, a los animales vivos de las especies bovina y ovina expedidos hacia un país de la Unión Europea o exportados, si bien en 2001 se introdujo un reembolso parcial de esta cotización. Según una sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas ⁽⁸⁾, debe considerarse que un impuesto de este tipo constituye una violación de la prohibición de discriminación establecida en el artículo 90 del Tratado si las ventajas que supone la afectación de los ingresos procedentes del tributo benefician especialmente a los productos nacionales gravados que son transformados o comercializados en el mercado nacional, compensando sólo una parte de la carga que recae sobre éstos y desfavoreciendo así a los productos nacionales exportados.

La Comisión considera en la presente fase que el producto de la tasa obtenido mediante gravamen sobre los animales expedidos hacia otros Estados miembros al objeto de financiar medidas de promoción, asistencia técnica e investigación y experimentación llevada a cabo por Interbev podría constituir una financiación incompatible con las normas de competencia y, por consiguiente, que las ayudas estatales así financiadas podrían ser igualmente incompatibles con el Tratado. En efecto, la tasa podría desfavorecer la producción de estos animales con vistas a su exportación hacia otros Estados miembros cuando la utilización de estos ingresos, por su naturaleza, pudiera favorecer la producción nacional comercializada en Francia en detrimento de la producción nacional exportada, y cuando el nivel de la tasa no tuviera en cuenta los beneficios deparadas a los productos nacionales en razón de su comercialización interna o externa.

2.2. La cotización FNE

Habida cuenta de la información disponible, en la fase presente la Comisión no tiene motivos para creer que esta cotización afecte o haya afectado a productos importados o expedidos hacia otros Estados miembros. En caso de que la Comisión llegara a una conclusión diferente, resultarían aplicables las disposiciones expuestas en el punto 2.1.

⁽⁸⁾ Sentencia de 23 de abril de 2002 en el asunto C-234/99 (Rec. 2002, p. I-3657).

CARTA

«Par la présente, la Commission a l'honneur d'informer la France qu'après avoir examiné les informations fournies par vos autorités sur la mesure citée en objet, elle a décidé d'ouvrir la procédure prévue à l'article 88, paragraphe 2, du traité CE.

I. Procédure

- (1) Suite à des informations reçues concernant les mesures en objet, la Commission européenne a interrogé les autorités françaises, à propos de celles-ci, par lettre du 2 octobre 2001. La représentation permanente de la France auprès de l'Union européenne a répondu à la Commission par lettre du 9 novembre 2001.
- (2) Comme la mesure a été mise à exécution sans autorisation préalable de la Commission, la mesure a été inscrite dans le registre des aides non-notifiées.

II. Description

- (3) La présente lettre concerne la cotisation interprofessionnelle instituée par l'Association Nationale Interprofessionnelle du Bétail et des Viandes (Interbev) au moyen d'un accord interprofessionnel du 20 décembre 1995, ainsi que la cotisation au profit d'un fonds de l'élevage, instituée par un accord interprofessionnel du 15 juin 1994. Elle concerne aussi les aides financées au moyen de cette dernière cotisation.

1. Interbev

- (4) Interbev a été fondée le 9 octobre 1979 sur l'initiative des organisations représentatives de la filière bétail et viandes des secteurs bovin et ovin⁽⁹⁾. Son rôle est de défendre et valoriser les intérêts communs de l'élevage et des activités industrielles, artisanales et commerciales de la filière. Interbev a été reconnue en 1980 comme organisation interprofessionnelle pour le secteur du bétail et des viandes. Elle est composée de douze organisations professionnelles nationales représentant les différents métiers du secteur économique bétail et viandes: éleveurs, abatteurs, grossistes, industriels, distributeurs.
- (5) D'après les informations publiées par Interbev, ses deux missions principales sont l'établissement des accords interprofessionnels et la communication collective. À cela s'ajoutent des programmes de recherche dans le secteur des viandes.
- (6) Les accords interprofessionnels définissent les règles régissant l'activité de la filière, dans l'intérêt général du secteur, et constituent une discipline volontaire dont l'adoption requiert l'unanimité des organisations nationales membres de l'interprofession. Un accord interprofessionnel peut être présenté aux pouvoirs publics dans le cadre de la procédure d'extension. Après promulgation de l'extension par arrêté conjoint des Ministères de l'Agriculture et de l'Économie, les mesures prévues par un accord interprofessionnel revêtent un caractère obligatoire pour l'ensemble des opérateurs de la filière.
- (7) Interbev met en place, tant au niveau national que régional, une communication visant à soutenir la consommation

des produits issus de l'élevage et à répondre aux attentes des consommateurs. Cette communication se traduit par des campagnes de publicité dans les médias (télévision, affichage, presse magazine et quotidienne, radio); par des actions de promotion en points de vente; par la participation à de nombreux salons et autres manifestations, tant grand public que professionnels; par des opérations de relations publiques.

- (8) Interbev engage chaque année des programmes de recherche dans le but de constituer un outil supplémentaire d'accompagnement de la stratégie interprofessionnelle. Les résultats de ces travaux constituent des éléments de réflexion pour l'adaptation des produits aux besoins du marché

2. Les cotisations interprofessionnelles

- (9) Deux types de cotisations interprofessionnelles, rendus obligatoires par les pouvoirs publics dans le cadre de la procédure d'extension, font l'objet de cet examen: d'un côté la cotisation sur les viandes et abats destinés à la consommation humaine des espèces bovine et ovine et sur les animaux vivants des espèces bovine et ovine expédiés vers les pays de l'Union européenne ou exportés («la cotisation sur les viandes»), et d'un autre côté, la cotisation au bénéfice du Fonds National de l'Élevage («la cotisation FNE»).

2.1. La cotisation sur les viandes

- (10) Par accord interprofessionnel du 25 juillet 1995, lequel a fait l'objet d'extension par un arrêté du 18 décembre 1995⁽¹⁰⁾, Interbev a institué une cotisation:
 - sur les viandes et abats destinés à la consommation humaine des espèces bovine et ovine;
 - sur les animaux vivants des espèces bovine et ovine expédiés vers les pays de l'Union européenne ou exportés.
- (11) La cotisation frappait trois catégories de viandes et/ou animaux, établies comme suit:
 - 1) Cotisation sur la viande et les abats destinés à la consommation humaine des animaux abattus en France: fixée à 0,084 FRF⁽¹¹⁾/kg de carcasse et versée par la personne physique ou morale, propriétaire ou copropriétaire de l'animal au moment de son abattage;
 - 2) Cotisation sur les viandes introduites ou importées pour être consommées en France: fixée à 0,042 FRF/kg et versée par la personne physique ou morale, premier propriétaire ou copropriétaire des viandes sur le territoire national;
 - 3) Cotisation sur les animaux vivants des espèces bovine et ovine expédiés vers un pays de l'Union européenne ou exportés: fixée à 7 FRF/tête et versée par la personne physique ou morale, dernier propriétaire ou copropriétaire des animaux sur le territoire national.

⁽¹⁰⁾ Journal Officiel de la République française n° 299 du 27 décembre 1995.

⁽¹¹⁾ 1 FRF = 0,15 euros.

⁽⁹⁾ Informations extraites du site Internet www.interbev.asso.fr

(12) L'accord interprofessionnel du 25 juillet 1995 a été remplacé par un autre accord interprofessionnel du 12 juin 2001, lequel a fait l'objet d'extension par arrêté du 19 avril 2001 ⁽¹²⁾ et, en dernier lieu, par arrêté du 19 septembre 2001 ⁽¹³⁾. L'article premier de l'arrêté prévoit que l'accord est étendu pour une période qui arrivera à échéance trois ans après la date de publication dudit arrêté, donc le 19 septembre 2004.

(13) Les autorités françaises n'ont pas fourni à la Commission le texte de l'accord interprofessionnel du 12 juin 2001. Toutefois, la Commission a pu obtenir des informations selon lesquelles le nouvel accord prévoyait une reconduction de la situation antérieure en ce qui concerne la catégorie des viandes et/ou animaux visés, avec des augmentations dans le montant de la cotisation: 0,1574 FRF pour la catégorie 1); 0,0656 FRF pour la catégorie 2); et 11,15 FRF pour la catégorie 3).

(14) Le nouvel accord introduit également la possibilité de rembourser partiellement la cotisation sur les viandes au moment de l'expédition de celles-ci vers un pays de l'Union européenne ou son exportation à des pays tiers. Le taux de remboursement est de 0,0656 FRF/kg.

(15) Par rapport à l'extension de 1995, les extensions intervenues en 2001 ont exclu du dispositif les dispositions de la catégorie 2) concernant la cotisation sur les viandes introduites ou importées pour être consommées en France. Ces produits ne sont donc plus frappés par la cotisation sur les viandes depuis le 4 mai 2001.

2.2. La cotisation FNE

(16) Par accord interprofessionnel du 15 juin 1994, lequel a fait l'objet d'extension par arrêté du 18 décembre 1995 ⁽¹⁴⁾ et, en dernier lieu, par arrêté du 19 septembre 2001 ⁽¹⁵⁾, Interbev a institué une cotisation au profit d'un fonds de l'élevage.

(17) Ce fonds professionnel, géré dans le cadre de la Confédération Nationale de l'Élevage (CNE), a été créé pour répondre aux deux objectifs majeurs suivants:

— inciter à la restructuration des organisations de service et favoriser leur adaptation aux besoins futurs d'éleveurs de moins en moins nombreux et confrontés aux politiques communautaires de maîtrise des productions;

— contribuer à la pérennisation des moyens collectifs en matière de création du progrès génétique et de recherche appliquée qui resteront à l'avenir les facteurs clés de la compétitivité de l'élevage.

(18) La constitution de ce fonds national a reçu l'approbation du Conseil de l'Agriculture française ainsi que de

⁽¹²⁾ Journal Officiel de la République française n° 104 du 4 mai 2001.

⁽¹³⁾ Journal Officiel de la République française n° 227 du 30 septembre 2001.

⁽¹⁴⁾ Journal Officiel de la République française n° 299 du 24 décembre 1995.

⁽¹⁵⁾ Journal Officiel de la République française n° 227 du 30 septembre 2001.

l'ensemble des organisations professionnelles de l'élevage et des pouvoirs publics. À la demande des représentants de la CNE, l'Assemblée Générale d'Interbev s'est prononcée à l'unanimité en faveur du prélèvement d'une cotisation additionnelle prélevée dans les mêmes conditions que la cotisation sur les viandes et entièrement supportée par les éleveurs.

(19) La cotisation est perçue auprès des personnes physiques ou morales propriétaires ou copropriétaires des animaux des espèces bovine et ovine abattus en France et est actuellement fixée à 0,02 FRF/kg de viande nette abattu.

(20) D'après les autorités françaises, les recettes de cette cotisation sont utilisées pour l'amélioration génétique, le système d'information génétique, la biotechnologie et les études économiques.

2.3. Le budget

(21) Selon les autorités françaises, le montant des recettes de ces cotisations s'est élevé à 147 Mio FRF en 1997, à 144 Mio FRF en 1998, à 145 Mio FRF en 1999 et à 149 Mio FRF en 2000.

3. *Les actions financées*

(22) Selon les autorités françaises, les ressources d'Interbev sont utilisées dans trois types d'actions: communication et promotion au bénéfice du secteur, assistance technique, et recherche et expérimentation.

3.1. Les actions de communication et de promotion

(23) Il s'agit du financement des campagnes de communication sur les thèmes «critères qualité contrôlés» et «critères qualité certifiés» au profit des viandes ou signes officiels de qualité (certification de conformité produit et label rouge). Elles ont aussi visé les marques interprofessionnelles inscrites dans le cadre de la certification de conformité produit «bœuf de tradition bouchère» et «bœuf verte prairie». Ces actions ont par ailleurs bénéficié des aides communautaires mises en œuvre dans le cadre du programme «Bœuf identifié de qualité», qui concerne également la viande de veau certifié.

(24) Des campagnes de communication plus génériques à la télévision et à la radio pour la viande de bœuf et sa préparation ont été financées. En plus, des actions de relations publiques sont organisées (concours de cuisine, concours d'animaux ...).

(25) Des actions relatives à la diffusion d'informations sont financées. À ce propos, Interbev a créé le centre d'information des viandes (CIV). Des actions dans le domaine des collectivités, des jeunes et de l'information sur le rôle de la viande dans l'équilibre alimentaire ont été mises sur place. En outre, des études ont été effectuées afin de savoir quelle était la place réelle de la viande bovine et ovine et des produits tripiers dans l'alimentation. Des campagnes d'information et d'orientation suite à l'apparition de l'ESB ont aussi été financées.

- (26) En ce qui concerne la promotion sur les marchés extérieurs, Interbev a financé des actions de collecte et de diffusion d'informations stratégiques sur l'évolution des marchés dans les autres pays (souscription à une analyse annuelle de l'évolution des marchés mondiaux et achat d'études), de publicité, de relations publiques, de participation à des salons professionnels et de promotion. Ces actions n'ont qu'un caractère générique et ne font référence à aucune marque et ne tirent pas argument de l'origine des produits.
- (27) Le montant de ces actions était sur le budget national de l'association en 2000: 61,9 Mio FRF pour la promotion, 25 Mio FRF pour l'information et 8,8 Mio FRF pour les marchés extérieurs, auxquels s'ajoutent 26 Mio FRF sur les budgets régionaux.

3.2. Les actions d'assistance technique

- (28) Interbev intervient en matière de certification et de qualification des éleveurs. Pour les viandes sous signe de qualité, l'interprofession s'attache à lever les contraintes auxquelles sont confrontés les opérateurs impliqués dans ces démarches de certification, notamment le coût des contrôles et la mise en place de la qualification dans les élevages.
- (29) En faveur de la certification de conformité, Interbev a élaboré une base commune à tous les référentiels viande qui impliquent les élevages de bovins, aucune viande bovine ne pouvant être certifiée si elle ne provient pas d'un élevage qualifié. Interbev met à disposition des opérateurs un certain nombre d'outils indispensables à l'organisation de la qualification (guides, formulaires, etc.) et met en place des tests d'organisation de la qualification des élevages tenant compte de la diversité des circuits d'approvisionnement de la filière (notamment celle du «bœuf de tradition bouchère»). Cela a pour objectif l'entrée des éleveurs indépendants dans la certification, une diminution globale des coûts en évitant une multiplication des visites de diagnostic chez les exploitants, la centralisation des informations et de certaines procédures au niveau de chaque région.
- (30) Interbev participe aux audits informatiques pour la réalisation des certificats de garantie d'origine et aide à la réalisation des essais de fonctionnement des logiciels. Il élabore des cahiers des charges collectifs en faveur des filières et participe à la diffusion et mise en œuvre de la charte des bonnes pratiques d'élevage et du code bonnes pratiques de travail des viandes. Il participe, enfin, à la clarification des transactions tout au long de la filière.
- (31) Le montant de ces actions était de 11 Mio FRF sur le budget national de l'association en 2000, auxquels s'ajoutent 9 Mio FRF sur les budgets régionaux.

3.3. Les actions de recherche et d'expérimentation

- (32) Selon les autorités françaises, l'association finance les actions les plus adaptées aux besoins de la filière, en

s'intéressant aux principaux axes suivants: la sécurité alimentaire, la gestion de la qualité et le bien-être animal.

- (33) En ce qui concerne la sécurité alimentaire, les travaux en 2000 ont, à titre d'exemple, porté sur: un état des lieux des niveaux de contamination des produits carnés d'origine bovine aux stades de la production et de la distribution; une évaluation de la contamination initiale des abats et de la durée de vie de ces produits; la mise au point de contrôles micro biologiques de routine et l'évaluation de l'importance de la contamination par salmonelles; une veille technologique concernant les méthodes de détection des prions pathogènes dans les produits animaux; une évaluation économique du coût de la mise en place d'un plan de contrôle de l'ESB dans les abattoirs.
- (34) Pour ce qui est de la gestion de qualité, Interbev finance: l'élaboration d'un document de vulgarisation des connaissances sur les anomalies concernant la viande, de la carcasse à l'étal, à l'attention des artisans bouchers; la vérification des performances de la technique de la suspension pelvienne sur la tendreté de la viande bovine; la mise au point d'outils d'accompagnement des démarches s'appuyant sur le code de bonnes pratiques de travail des viandes; la vérification expérimentale de la pertinence des conditions de l'affranchi (pratique des bouchers de ne garder que la partie tendre d'un muscle) au moyen d'analyses sensorielles; un test de faisabilité d'une nouvelle méthode, rapide et non destructive, de détermination de la tendreté de la viande de bœuf (spectroscopie de fluorescence frontale); la contribution à la recherche et la mise au point des produits nouveaux en viande bovine et ovine par les analyses telles que le bilan d'innovation/produit, les offres dans d'autres pays (viande bovine et autres produits), les attentes ou les demandes de l'aval susceptibles de justifier des produits nouveaux.
- (35) En ce qui concerne le bien-être animal, Interbev appuie les travaux de recherche de la station de l'Institut de l'élevage du Rheu visant à répondre à de nombreuses questions et demandes de références soulevées par l'application des règles communautaires en la matière. Interbev a aussi été associé à un programme sur le bien-être des animaux pendant le transport, axé notamment sur l'abreuvement, la ventilation des camions et les températures.
- (36) Le montant de ces actions était de 4 Mio FRF sur le budget national de l'association en 2000.

III. **Appréciation**

1. *Caractère d'aide. Applicabilité de l'article 87, paragraphe 1, du traité*

- (37) En ce qui concerne tout d'abord la nature des cotisations en l'espèce, la Commission note que celles-ci ont été rendues obligatoires par le Gouvernement français dans le cadre d'une procédure d'extension par les pouvoirs publics des accords interprofessionnels. L'extension des accords est faite par voie d'adoption d'un arrêté publié dans le Journal officiel de la République française.

- (38) Il ressort de cela que ces cotisations ont nécessité d'un acte d'autorité publique pour produire tous ses effets. De ce fait, la Commission considère à ce stade qu'il s'agit en l'espèce de taxes parafiscales, c'est-à-dire de ressources publiques.
- (39) Dans la mesure où des ressources publiques auraient été utilisées pour financer des avantages pour des entreprises du secteur des viandes, leur notification à la Commission constitue une obligation découlant de l'article 88, paragraphe 3, du traité.
- (40) Les autorités françaises n'ont pas notifié à la Commission, au sens de l'article 88, paragraphe 3, du traité, les dispositifs instaurant lesdites cotisations ni le financement des actions en faveur du secteur de la viande. Dès lors, si les mesures mises à exécution par la France contenaient des éléments d'aide d'État, il s'agira d'aides nouvelles, non notifiées à la Commission et, de ce fait, illégales au sens de l'article premier, point f), du règlement (CE) n° 659/1999 du Conseil du 22 mars 1999 portant modalités d'application de l'article 93 (devenu article 88) du traité CE⁽¹⁶⁾.
- (41) D'après les autorités françaises, la Commission a déjà eu connaissance du fonds national d'élevage, au sujet duquel elle avait reçu des informations des autorités françaises en 1995 et 1996, dans le cadre de l'aide d'État NN 34/95. L'aide concernait des investissements visant la restructuration de l'élevage de bovins allaitants, et la Commission a conclu son examen à l'époque déclarant que ces mesures tombaient exclusivement dans le champ d'application du règlement (CEE) n° 2328/91 du Conseil, du 15 juillet 1991, concernant l'amélioration de l'efficacité des structures de l'agriculture⁽¹⁷⁾, dont l'article 35, paragraphe 2, excluait, dans certains cas, l'application des articles 92 à 94 (devenus articles 87 à 89) du traité⁽¹⁸⁾.
- (42) La Commission tient à signaler qu'elle n'a pas disposé d'information concernant le fonds national d'élevage dans le cadre de cette aide et que, en tout cas, sa position ne concernait que des aides aux investissements en faveur de certains éleveurs, notamment en vue de la première acquisition d'animaux. La Commission n'a pas pris position à l'égard des aides pour l'amélioration génétique, le système d'information génétique, la biotechnologie ou les études économiques, lesquelles n'ont pas fait l'objet de notification au sens de l'article 88, paragraphe 3, du traité.
- (43) D'ailleurs, le règlement n° 2328/91 a été abrogé par le règlement (CE) n° 950/97 du Conseil du 20 mai 1997 concernant l'amélioration de l'efficacité des structures de l'agriculture⁽¹⁹⁾, si bien que celui-ci a repris les termes du règlement précédent pour ce qui était de l'application partielle des articles 92 à 94 (devenus articles 87 à 89). Or, le règlement n° 950/97 a été abrogé à son tour par le règlement (CE) n° 1257/1999 du Conseil du 17 mai 1999 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA)⁽²⁰⁾, qui rend les articles 87 à 89 du traité pleinement applicables vis-à-vis des investissements en l'espèce. Les lignes directrices agricoles adoptées en 2000 reprennent par ailleurs les points principaux dudit règlement en ce qui concerne les aides aux investissements.
- (44) La Commission ne dispose pas d'information lui permettant de conclure que des mesures utiles, au sens du point 23.4 des lignes directrices, auraient été prises afin d'adapter le régime d'aides NN 34/95 aux nouvelles dispositions applicables en matière d'aides aux investissements dans la production, la transformation et la commercialisation des produits agricoles de l'annexe I.
- (45) Les autorités françaises sont invitées à confirmer par écrit qu'elles ont adopté les mesures utiles nécessaires vis-à-vis desdites aides aux investissements.
- (46) Selon l'article 87, paragraphe 1, du traité, sauf dérogations prévues par ce traité, sont incompatibles avec le marché commun dans la mesure où elles affectent les échanges entre États membres, les aides accordées par les États ou au moyen de ressources d'État sous quelque forme que ce soit, qui faussent ou qui menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions.
- (47) Les articles 87 à 89 du traité sont rendus applicables dans le secteur de la viande bovine par l'article 40 du règlement (CE) n° 1254/99 du Conseil⁽²¹⁾ portant organisation commune des marchés pour ces produits. Avant l'adoption de ce dernier, ils étaient rendus applicables dans le même secteur par l'article 24 du règlement (CEE) n° 805/68 du Conseil⁽²²⁾. Ils sont rendus applicables dans les secteurs de la viande ovine par l'article 23 du règlement (CE) n° 2529/2001 du Conseil du 19 décembre 2001 portant organisation commune des marchés dans le secteur des viandes ovine et caprine⁽²³⁾. Avant l'adoption de ce dernier, ils étaient rendus applicables dans le même secteur par l'article 22 du règlement (CE) n° 2467/98 du Conseil⁽²⁴⁾ et, avant l'adoption de ce dernier, par l'article 27 du règlement (CEE) n° 3013/89 du Conseil⁽²⁵⁾.
- (48) Il apparaît que ces aides sont susceptibles d'affecter les échanges entre États membres dans la mesure où elles favorisent la production nationale au détriment de la production des autres États membres. En effet, le secteur de la viande est extrêmement ouvert à la concurrence au niveau communautaire et, donc, très sensible à toute mesure en faveur de la production dans l'un ou l'autre État membre.
- (49) Le fait qu'il y ait des échanges entre États membres dans le secteur de la viande semble démontré par l'existence d'une organisation commune des marchés dans le secteur.

(16) JO L 83 du 27.3.1999.

(17) JO L 218 du 6.8.1991.

(18) Lettre de la Commission aux autorités françaises n° SG 96 D/6397 du 15.7.1996.

(19) JO L 142 du 2.6.1997.

(20) JO L 160 du 26.6.1999.

(21) JO L 160 du 26.6.1999.

(22) JO L 148 du 28.6.1968.

(23) JO L 341 du 22.12.2001.

(24) JO L 312 du 20.11.1998.

(25) JO L 289 du 7.10.1989.

- (50) Le tableau suivant montre, à titre d'exemple, le niveau des échanges commerciaux intracommunautaires des produits de viande bovine et ovine entre les années 1999 et 2001 ⁽²⁶⁾.

Année	Viande bovine (1 000 t)		Viande ovine (1 000 t)	
	Importations UE	Exportations UE	Importations UE	Exportations UE
1999	2 001,4	2 044,9	275,8	269,3
2000	2 203,1	2 014,0	280,3	260,8
2001	1 475,2	1 574,6	192,5	201,0

- (51) À ce stade, il semble s'agir donc de mesures qui relèvent de l'article 87, paragraphe 1, du traité.

2. Compatibilité de l'aide

- (52) Le principe d'incompatibilité énoncé à l'article 87, paragraphe 1, connaît toutefois des exceptions.
- (53) Les dérogations prévues au paragraphe 2 de l'article 87 concernant, notamment, les aides à caractère social et les aides visant à compenser des dommages causés par un désastre naturel ou par un événement exceptionnel ne semblent manifestement pas applicables.
- (54) Les dérogations prévues à l'article 87, paragraphe 3, du traité doivent être interprétées strictement lors de l'examen de tout programme d'aide à finalité régionale ou sectorielle ou de tout cas individuel d'application de régimes d'aides générales. Elles ne peuvent notamment être accordées que dans le cas où la Commission pourrait établir que l'aide est nécessaire pour la réalisation de l'un des objectifs en cause.
- (55) La Commission considère, à ce stade, que les aides en cause ne sont pas destinées à favoriser le développement économique d'une région dans laquelle le niveau de vie est anormalement bas ou dans laquelle sévit un grave sous-emploi au sens de l'article 87, paragraphe 3, point a). Elles ne sont pas non plus destinées à promouvoir la réalisation d'un projet important d'intérêt européen commun ou à remédier à une perturbation grave de l'économie de l'État membre au sens de l'article 87, paragraphe 3, point b). Les aides ne sont pas non plus destinées à promouvoir la culture ou la conservation du patrimoine au sens de l'article 87, paragraphe 3, point d).
- (56) La seule dérogation envisageable à ce stade pour le cas d'espèce est celle de l'article 87, paragraphe 3, point c), qui prévoit que peuvent être considérées comme compatibles avec le marché commun les aides destinées à faciliter le développement de certaines activités ou de certaines régions économiques, quand elles n'altèrent pas les conditions des échanges dans une mesure contraire à l'intérêt commun.
- (57) D'après le point 23.3 des Lignes directrices de la Communauté concernant les aides d'État dans le secteur agricole (ci-après «les lignes directrices agricoles») ⁽²⁷⁾ et la

Communication de la Commission sur la détermination des règles applicables à l'appréciation des aides d'État illégales, toute aide illégale au sens de l'article 1^{er}, point f), du règlement (CE) n° 659/1999 doit être évaluée conformément aux règles et aux lignes directrices en vigueur au moment où l'aide est accordée.

- (58) Les lignes directrices agricoles s'appliquent depuis le 1^{er} janvier 2000. Dès lors, toute aide octroyée après cette date devra être jugée à la lumière des lignes directrices. En revanche, toute aide octroyée avant cette date devra, le cas échéant, être jugée à la lumière des dispositions et de la pratique applicable avant le 1^{er} janvier 2000. Les aides en l'espèce ont été octroyées depuis 1996 et sont toujours octroyées à l'heure actuelle.
- (59) S'agissant d'aides d'État financées au moyen d'une taxe parafiscale, les actions financées par les aides ainsi que le financement des aides elles-mêmes doivent faire l'objet d'examen par la Commission. En effet, l'incompatibilité éventuelle du financement d'une aide d'État avec le marché commun rendrait les aides elles-mêmes aussi incompatibles, même dans le cas où l'octroi de l'aide aurait respecté les règles de concurrence applicables.

2.1. Les aides

2.1.1. Les actions de promotion

- (60) Pour ce qui est des aides à la promotion, la compatibilité des aides octroyées avant le 1^{er} janvier 2002 doit être vérifiée à la lumière de l'Encadrement des aides nationales à la publicité des produits agricoles et de certains produits ne relevant pas de l'annexe II du traité CEE ⁽²⁸⁾ et, pour les aides octroyées après cette date, à la lumière des Lignes directrices communautaires applicables aux aides d'État à la publicité des produits relevant de l'annexe I du traité CE et de certains produits ne relevant pas de l'annexe I ⁽²⁹⁾.
- (61) L'encadrement de 1987 que les lignes directrices de 2002 partagent, en essence, les mêmes principes. Ils prévoient des critères négatifs et positifs qui doivent être respectés par tous les régimes d'aides nationales. Ainsi, il ne doit pas s'agir des actions de publicité contraires à l'article 28 du traité ou au droit communautaire dérivé et ne doivent pas être orientées en fonction d'entreprises déterminées.

⁽²⁶⁾ Agriculture in the European Union, Statistical and economic information 2002. Direction générale de l'Agriculture, Commission européenne.

⁽²⁷⁾ JO C 28 du 1.2.2000 et rectificatif JO C 232 du 12.8.2000.

⁽²⁸⁾ JO C 302 du 12.11.1987.

⁽²⁹⁾ JO C 252 du 12.9.2001.

(62) D'après les informations envoyées par les autorités françaises, il est possible de conclure que ces mesures auront des objectifs concordants à plusieurs des critères positifs retenus dans les dispositifs susvisés, puisqu'elles s'inscriront: certaines dans l'objectif de résorption de productions agricoles excédentaires, et certaines dans l'objectif de développement de produits de haute qualité et d'alimentation saine.

(63) Les autorités françaises ont en outre expliqué que les messages transmis par les actions publicitaires n'auront pas pour objet de dissuader les consommateurs d'acheter des produits d'autres États membres ou de dénigrer lesdits produits et ils ne profiteront pas à une marque d'une entreprise particulière ou d'un producteur individuel.

(64) En ce qui concerne le plafonnement des aides, les actions de publicité peuvent être financées à hauteur de 50 % par des ressources étatiques, le solde devant être apporté par les organisations professionnelles et les interprofessions bénéficiaires soit par des contributions volontaires, soit par la collecte de taxes parafiscales ou de contributions obligatoires. En l'espèce, les mesures sont entièrement financées par des taxes parafiscales, et les efforts financiers des professionnels dans ces campagnes atteignent par définition le niveau de 50 % de leurs coûts.

(65) La Commission considère à ce stade que les aides publiques versées pour financer les actions de promotion en l'espèce semblent avoir respecté les critères établis dans les dispositifs communautaires applicables en la matière.

2.1.2. Les actions d'assistance technique

(66) En ce qui concerne les aides à l'assistance technique, la compatibilité des aides octroyées avant le 1^{er} janvier 2000 devra être vérifiée à la lumière de la pratique de la Commission inspirée de la Proposition de mesures utiles au sujet des aides octroyées par les États membres dans le secteur de l'élevage et des produits de l'élevage⁽³⁰⁾ et, pour les aides octroyées après cette date, à la lumière des lignes directrices agricoles.

(67) La pratique de la Commission applicable avant 2000 et les lignes directrices agricoles adoptées cette année-là partagent, en essence, les mêmes principes. Ainsi, des aides octroyées à raison de 100 % des dépenses admissibles sont autorisées concernant notamment des actions d'assistance technique par l'information et par l'assistance comptable, à la vulgarisation de nouvelles techniques, ainsi que celles relatives à la formation des travailleurs agricoles.

(68) Avec l'adoption des lignes directrices en 2000, une nouvelle condition a été ajoutée en ce sens que les aides doivent être accessibles à toutes les personnes éligibles exerçant dans la zone concernée, dans des conditions objectivement définies et que le montant d'aide total octroyé ne peut pas dépasser 100 000 euros par bénéficiaire par période de trois ans ou, s'agissant des PME, à 50 % des dépenses éligibles, le montant le plus élevé s'appliquant.

(69) Les autorités françaises ont souligné, à juste titre, que l'assistance technique en l'espèce ne revêt en fait pas le caractère d'une assistance à des bénéficiaires individuels, puisqu'il s'agit d'une action globale. Dans ce cadre, il ne semble pas pertinent de se référer à un plafond de niveau d'aide par bénéficiaire. En revanche, les autorités françaises ont expliqué que le critère de l'accès des travaux réalisés à tous les professionnels potentiellement intéressés est parfaitement rempli.

(70) La Commission considère à ce stade que les aides publiques versées pour financer les actions d'assistance technique en l'espèce semblent avoir respecté les critères établis dans les dispositifs communautaires applicables en la matière.

2.1.3. Les actions de recherche et expérimentation

(71) Pour ce qui est des actions de recherche et expérimentation, la compatibilité des aides octroyées avant le 1^{er} janvier 2000 devra être vérifiée à la lumière de l'Encadrement communautaire des aides d'État à la recherche et au développement⁽³¹⁾ et de la Communication de la Commission relative à la modification dudit encadrement⁽³²⁾, et pour les aides octroyées après cette date, à la lumière des lignes directrices agricoles, lesquelles font, dans leur point 17, un renvoi audit encadrement.

(72) L'encadrement communautaire précise qu'il est compatible avec le marché commun un taux d'aide pouvant atteindre 100 %, même dans le cas où la R&D serait exécutée par des entreprises, pour autant que les quatre conditions y reprises soient remplies dans tous les cas:

- a) l'aide revêt un intérêt général pour le secteur particulier concerné, sans provoquer de distorsion de concurrence induite dans d'autres secteurs,
- b) l'information doit être publiée dans des journaux appropriés, ayant au moins une distribution nationale et non limitée aux membres d'une organisation particulière, de manière à garantir que tout opérateur potentiellement intéressé par cette activité peut être facilement informé qu'elle est ou a été mise en œuvre et que les résultats sont ou seront fournis, sur demande, à toute partie intéressée. Cette information sera publiée à une date qui ne sera pas postérieure à toute information qui peut être donnée aux membres d'une organisation particulière,
- c) les résultats des travaux sont fournis, pour exploitation, par toutes les parties concernées, y compris le bénéficiaire de l'aide, sur une base égale, à la fois en termes de coût et de temps,
- d) l'aide satisfait aux conditions prévues à l'annexe 2 «Soutien interne: base de l'exemption des engagements de réduction» à l'accord sur l'agriculture conclu lors du cycle d'Uruguay des négociations commerciales multilatérales⁽³³⁾.

⁽³¹⁾ JO C 45 du 17 février 1996.

⁽³²⁾ JO C 48 du 13 février 1998.

⁽³³⁾ JO L 336 du 23.12.1994.

⁽³⁰⁾ Lettre de la Commission aux États membres n° S/75/29416 du 19 septembre 1975.

(73) Les autorités françaises ont expliqué à cet égard que les actions de recherche et d'expérimentation technique d'Interbev sont réalisées au profit de l'ensemble des intervenants de la filière. En outre, l'association diffuse les connaissances acquises et les recommandations techniques en animant des formations et en distribuant des documentations, notices, résumés, dépliants d'information et sur des supports électroniques. Tout éleveur, abatteur, boucher, transformateur ou vendeur dans la filière bovine et ovine peut être informé des résultats et accéder aux synthèses des recherches sans discrimination au même moment que tout autre et sur simple demande. Enfin, les autorités françaises assurent que les actions en question ne donnent lieu à aucun versement direct aux producteurs ni aux transformateurs et qu'elle satisfait aux critères commerciaux internationaux souscrits par l'Union européenne.

(74) La Commission considère à ce stade que les aides publiques versées pour financer les actions de recherche et expérimentation en l'espèce semblent avoir respecté les critères établis dans les dispositifs communautaires applicables en la matière.

2.1.4. Les actions financées par la cotisation FNE

(75) La Commission s'interroge sur la nature précise des actions financées par la cotisation FNE, dont l'objet est d'inciter à la restructuration des organisations de service et favoriser leur adaptation aux besoins futurs d'éleveurs, ainsi que de contribuer à la pérennisation des moyens collectifs en matière de création du progrès génétique et de recherche appliquée.

(76) Les recettes de cette cotisation sont utilisées, d'après les autorités françaises, pour l'amélioration génétique, le système d'information génétique, la biotechnologie et les études économiques.

(77) Ces éléments d'information sont insuffisants pour permettre à la Commission de constater la compatibilité de ces actions avec les dispositions communautaires éventuellement applicables.

(78) La Commission, sur base des informations disponibles, n'est pas, à ce stade, en mesure d'arriver à la conclusion que les actions financées par la cotisation FNE sont compatibles avec le traité CE.

2.2. Le financement des aides

(79) L'examen de la Commission porte sur certains aspects liés à la cotisation sur les viandes et la cotisation FNE dans la mesure où le commerce intra-communautaire pourrait être affecté par lesdites cotisations.

2.2.1. La cotisation sur les viandes

(80) Entre le 1^{er} janvier 1996 et le 4 mai 2001, la cotisation sur les viandes frappait, entre autres, les viandes introduites ou importées pour être consommées en France.

(81) Conformément à la jurisprudence de la Cour de Justice ⁽³⁴⁾, la Commission considère normalement que le financement d'une aide par le biais de charges obligatoires peut avoir une incidence sur l'aide en ayant un effet protecteur allant au-delà de l'aide proprement dite. Les cotisations en question constituent en effet des charges obligatoires. Suivant cette même jurisprudence, la Commission considère qu'une aide aux producteurs nationaux ne peut être financée par des taxes parafiscales grevant également les importations des producteurs du même produit des autres États membres.

(82) Tenant compte de la jurisprudence citée ci-dessus ainsi que du fait que les mesures financées par la taxe semblent constituer une aide d'État au sens de l'article 87 du traité et que la taxe revêt un caractère discriminatoire allant à l'encontre de l'article 90 du traité dans la mesure où les produits en provenance des autres États membres ont dû aussi acquitter la taxe, sans toutefois bénéficier des avantages découlant de celle-ci, la Commission considère, à ce stade, que le fruit de la taxe obtenu en grevant les produits importés des autres États membres en vue de financer les actions de promotion, d'assistance technique et de recherche et expérimentation menées par Interbev, pourrait constituer un financement incompatible de l'aide au regard des règles de concurrence et, par conséquent, que les aides d'État ainsi financées pourraient être incompatibles avec le traité dans une mesure identique.

(83) Depuis le 1^{er} janvier 1996, la cotisation frappe, entre autres, les animaux vivants des espèces bovine et ovine expédiés vers un pays de l'Union européenne ou exportés, bien qu'un remboursement partiel de cette cotisation ait été introduit en 2001.

(84) Selon un arrêt de la Cour ⁽³⁵⁾, une taxe doit être considérée comme constituant une violation de l'interdiction de discrimination édictée à l'article 90 du traité si les avantages que comporte l'affectation de la recette de l'imposition profitent spécialement à ceux des produits nationaux imposés qui sont transformés ou commercialisés sur le marché national, en compensant partiellement la charge supportée par ceux-ci et en défavorisant ainsi les produits nationaux exportés.

(85) La Cour a dit pour droit que une taxe perçue par un organisme de droit public selon des critères identiques sur les porcs produits dans un État membre en vue de l'abattage sur le marché national ou en vue de l'exportation sur pied vers d'autres États membres, dont le produit est affecté à des activités qui bénéficient aux deux types de production, est susceptible d'être qualifiée d'imposition intérieure discriminatoire, interdite par l'article 90 du traité CE, si et dans la mesure où les avantages qui découlent de l'affectation de son produit compensent partiellement la charge grevant les porcs produits en vue de l'abattage dans l'État membre concerné, défavorisant ainsi la production de porcs en vue de leur exportation sur pied vers d'autres États membres.

⁽³⁴⁾ Arrêt du 26 juin 1970 dans l'affaire 47/69, Recueil XVI, p. 487.

⁽³⁵⁾ Arrêt du 23 avril 2002 dans l'affaire C-234/99, Recueil 2002, p. I-3657.

(86) Par analogie, toute taxe frappant les animaux vivants des espèces bovine et ovine expédiés vers d'autres États membres est susceptible d'être qualifiée d'imposition intérieure discriminatoire, interdite par l'article 90 du traité, en ce sens qu'elle pourrait défavoriser la production de ces animaux en vue de leur exportation vers d'autres États membres lorsque l'affectation des recettes serait, par sa nature, susceptible de favoriser la production nationale commercialisée en France au détriment de la production nationale exportée, et lorsque le niveau de la taxe ne tient pas compte des profits différents tirés par les produits nationaux du fait de leur commercialisation interne ou externe.

(87) La Commission considère à ce stade que le fruit de la taxe obtenu en grevant les animaux expédiés vers d'autres États membres en vue de financer les actions de promotion, d'assistance technique et de recherche et expérimentation menées par Interbev, pourrait constituer un financement incompatible de l'aide au regard des règles de concurrence et, par conséquent, que les aides d'État ainsi financées pourraient être incompatibles avec le traité dans une mesure identique.

2.2.2. La cotisation FNE

(88) La cotisation est perçue auprès des personnes physiques ou morales propriétaires ou copropriétaires des animaux des espèces bovine et ovine abattus en France.

(89) Sur base des informations disponibles, la Commission n'a pas d'informations, à ce stade, pour conclure que cette cotisation frappe ou ait frappé des produits importés ou expédiés vers d'autres États membres.

(90) Toutefois, la Commission a des doutes en ce qui concerne la possibilité que des animaux importés en France en vue de leur abattage auraient aussi été frappés par la taxe. Ainsi, faute d'informations précises, la Commission, suivant le raisonnement exposé au point 2.2.1, considère à ce stade que le fruit de la taxe ayant pu être obtenu en grevant les animaux importés des autres États membres en vue de leur abattage afin de financer les actions promues par le FNE, pourrait constituer un financement incompa-

tible de l'aide au regard des règles de concurrence et, par conséquent, que les aides d'État ainsi financées pourraient être incompatibles avec le traité dans une mesure identique.

IV. Conclusion

(91) Pour les raisons exposées ci-dessus, la Commission constate, après cet examen préliminaire, que les mesures en l'espèce suscitent des doutes quant à sa compatibilité avec le marché commun.

(92) La Commission, après avoir examiné les informations fournies par les autorités françaises, a dès lors décidé d'ouvrir la procédure prévue à l'article 88, paragraphe 2, du traité CE en ce qui concerne les aides traitées dans la présente décision.

(93) Compte tenu des considérations qui précèdent, la Commission invite la France, dans le cadre de la procédure de l'article 88, paragraphe 2 du traité CE, à présenter ses observations et à fournir toute information utile pour l'évaluation des mesures en question, notamment à propos des différents régimes d'aides traités dans la présente décision, en particulier celles concernant les actions financées par la cotisation FNE, dans un délai d'un mois à compter de la date de réception de la présente. Elle invite vos autorités à transmettre immédiatement une copie de cette lettre aux bénéficiaires potentiels de l'aide.

(94) La Commission rappelle à la France l'effet suspensif de l'article 88, paragraphe 3, du traité CE et se réfère à l'article 14 du règlement (CE) n° 659/1999 du Conseil qui prévoit que toute aide illégale pourra faire l'objet d'une récupération auprès de son bénéficiaire. En outre, la dépense relative aux mesures nationales qui affectent directement des mesures communautaires pourra se voir refuser l'imputation au budget du FEOGA.

(95) Par la présente, la Commission avise la France qu'elle informera les intéressés par la publication de la présente lettre au *Journal officiel de l'Union européenne*.

Notificación previa de una operación de concentración**(asunto COMP/M.3251 — PAI Partners/GrandVision)****Asunto susceptible de ser tratado por procedimiento simplificado**

(2003/C 189/06)

(Texto pertinente a efectos del EEE)

1. El 31 de julio de 2003 y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 4 del Reglamento (CEE) nº 4064/89 del Consejo ⁽¹⁾, modificado por el Reglamento (CE) nº 1310/97 ⁽²⁾, la Comisión recibió notificación de un proyecto de concentración por el que la empresa francesa PAI Partners adquiere el control, con arreglo a lo dispuesto en la letra a) del apartado 1 del artículo 3 del citado Reglamento, de la totalidad de la empresa francesa GrandVision mediante una oferta pública de adquisición anunciada el 23 de julio de 2003.

2. **Ámbito de actividad de las empresas implicadas:**

— PAI Partners: gestión de participaciones en empresas,

— GrandVision: montaje, tratamiento, distribución y venta de productos ópticos (puntos de venta: GrandOptical, Générale d'Optique, Solaris, Vision Express Optical Lab).

3. Tras haber realizado un examen preliminar, la Comisión considera que la concentración notificada podría entrar en el ámbito de aplicación del Reglamento (CEE) nº 4064/89. No obstante, se reserva la posibilidad de tomar una decisión definitiva sobre este punto. De conformidad con la Comunicación de la Comisión sobre el procedimiento simplificado para tramitar determinadas operaciones de concentración con arreglo al Reglamento (CEE) nº 4064/89 del Consejo ⁽³⁾, se hace notar que este caso es susceptible de ser tratado por el procedimiento establecido en dicha Comunicación.

4. La Comisión insta a los terceros interesados a que le presenten sus observaciones eventuales con respecto a la propuesta de concentración.

Las observaciones deberán obrar en poder de la Comisión en un plazo máximo de diez días naturales a contar desde el día siguiente a la fecha de esta publicación. Podrán enviarse por fax [(32-2) 296 43 01/296 72 44] o por correo, indicando la referencia COMP/M.3251 — PAI Partners/GrandVision, a la dirección siguiente:

Comisión Europea
Dirección General de Competencia
Registro de Operaciones de Concentración
J-70
B-1049 Bruxelles/Brussel.

⁽¹⁾ DO L 395 de 30.12.1989, p. 1; rectificación en el DO L 257 de 21.9.1990, p. 13.

⁽²⁾ DO L 180 de 9.7.1997, p. 1; rectificación en el DO L 40 de 13.2.1998, p. 17.

⁽³⁾ DO C 217 de 29.7.2000, p. 32.

III

*(Informaciones)***COMISIÓN****ANUNCIO DE CONVOCATORIA DE PROPUESTAS****Apoyo para la rehabilitación de las víctimas de la tortura****EuropeAid/116969/C/G***(2003/C 189/07)*

La Comisión Europea invita a presentar propuestas sobre la rehabilitación de las víctimas de la tortura en centros de rehabilitación establecidos en la Unión Europea. El texto íntegro de la convocatoria de propuestas y la Guía para los solicitantes se pueden consultar en EuropeAid (F6, J-54 1/140) y en la siguiente dirección de Internet: <http://europa.eu.int/comm/europeaid/cgi/frame12.pl>

El plazo límite para la presentación de propuestas es el 6 de noviembre de 2003, a las 16.00 horas.
